

MODIFICACIONES AL REGIMEN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

38139

0/2 46
6 11
I

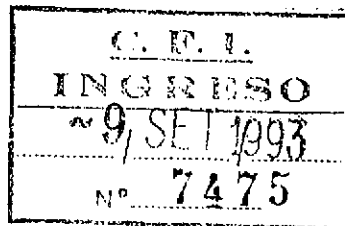
Buenos Aires, 8 de setiembre de 1993

Sr. Secretario

Consejo Federal de Inversiones

Ing. Juan José Ciácerá

S-----/-----D



De mi consideración:

Me dirijo a usted a los efectos de elevarle el informe parcial del trabajo "Modificaciones al régimen de contrataciones del Estado nacional", para el cual fuera contratado oportunamente por ese Consejo.

Sin otro particular, saludo al señor Secretario atentamente.

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of loops and a final horizontal stroke.

Aldo José García

MODIFICACIONES AL REGIMEN DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

INDICE

Introducción

1. Objetivos

2. Metodología

Parte I

I. 1. Evolución del régimen de contrataciones del Estado nacional.

I. 2. El proyecto del PEN y su vinculación con la reforma del Sistema de Administración Financiera y de Control del Estado Nacional.

I. 3. Análisis del nuevo régimen de contrataciones del sector público propuesto.

I.3.1. Objetivos

I.3.2. Ambito de aplicación

I.3.3. Contratos contemplados

I.3.4. Organización del sistema

I.3.5. Formas de selección

I.3.6. Otros aspectos

I.4. Alcance de las principales reformas a introducir con el nuevo sistema.

I.5. Consideraciones económicas y financieras acerca del sistema vigente y de las modificaciones propuestas.

Parte II

II.1. Análisis comparativo del sistema propuesto por el PEN con los vigentes en la Nación y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

INTRODUCCION

El Poder Ejecutivo Nacional ha remitido, con fecha 15 de diciembre de 1992, al Congreso de la Nación el proyecto de ley relativo a las contrataciones del Estado. Por cierto que no se trata de una iniciativa aislada sino que viene a integrar el proceso de reforma de la administración financiera gubernamental, plasmado principalmente en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24156 y que habrá de complementarse con una ley sobre la administración de los bienes fiscales.

Por ello esta reforma, y los procedimientos de compra del Estado que serán su resultante, deben verse interactuando dentro de un sistema que está transformando considerablemente la administración de los fondos públicos. Pero debe aclararse que un proceso de esta magnitud no se cristaliza sólo con la aprobación de las normas legales respectivas, su puesta en vigencia real, la cabal sujeción de los actos y procesos administrativos a la letra y al espíritu de una normativa novedosa son un proceso gradual y progresivo.

En el caso particular del Programa de Reforma a la Administración Financiera Gubernamental puesto en marcha por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos en 1992 (según publicación del mismo nombre y fecha dada a conocer por la Secretaría de Hacienda) su aplicación se extiende hoy vertical y horizontalmente a toda la administración nacional y hace sentir su influencia aun en los ámbitos provinciales y municipales, acometiendo tareas de la magnitud de transformar el sistema presupuestario, capacitar a los agentes que asumen hoy tareas de mayor complejidad y, sobre todo, de mayor responsabilidad en los procesos de administración y control interno, etc.. A este sistema en pleno despliegue se agregarán, en plena marcha, las modificaciones que el Congreso de la Nación sancione con base al proyecto del Ejecutivo.

A esta dimensión de apreciar a la reforma de los mecanismos de contratación dentro de un sistema en pleno despliegue debe agregarse una segunda y no menos importante que es la de considerarlo dentro del proceso socioeconómico del país. En este sentido se destaca la crisis del papel del Estado dentro de la economía que se verifica en las últimas tres décadas, con su consecuente debate, y los intentos de la última década para darle respuesta, particularmente el Plan de Convertibilidad, a dos años de su puesta en marcha, influye sobre las compras del Estado al permitir después de mucho tiempo que tanto el Estado como el cocontratante puedan atenerse a reglas de juego claras y perdurables en el tiempo.

Por todas estas razones, el proyecto de modificaciones al régimen de compras sólo puede entenderse en el contexto de una realidad y un tiempo concretos y sólo será exitoso en la medida que logre los objetivos deseables en el marco de esas circunstancias.

1. OBJETIVOS

El objetivo del presente trabajo es el estudio de la reforma propuesta, comparándola con los sistemas vigentes en la Nación y en el ámbito provincial y el análisis de la posibilidad de la formulación de un sistema interjurisdiccional, compatible y coordinado, de contrataciones del Estado en materia de suministros, servicios, obras, concesiones de obra y servicios públicos, consultoría, compraventa de bienes y locaciones y con exclusión del contrato de empleo público.

En segundo lugar se propone el análisis de ese comparativo de la normativa y de las conclusiones y propuestas a la luz de la experiencia nacional en la materia y de las recomendaciones que se han formulado en la materia por parte de los sectores interesados.

2. METODOLOGIA

Se considerará, fundamentalmente, el mensaje N° 2392 y el proyecto elevado por el Ejecutivo al congreso de la Nación; los lineamientos del Programa de Reforma de la Administración Financiera Gubernamental publicado por la Secretaría de Hacienda en 1992; la legislación en la materia vigente en el ámbito nacional y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

También se contemplarán iniciativas de distintas entidades, como la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UADE), el Servicio Nacional de Catalogación (SENC), Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), etc.

A partir de la documentación señalada se efectuará un análisis comparativo de los sistemas vigentes en la Nación y en las provincias mencionadas con el propuesto por el proyecto.

Se considerará la importancia de las compras del Estado en la economía, en escala nacional, regional y provincial.

Finalmente se elaborarán conclusiones y recomendaciones tendientes a la conformación de un sistema coordinado y compatible de compras del Estado para las distintas jurisdicciones.

PARTE I

I.1. Evolución del régimen de contrataciones del Estado nacional

I.1.1. El régimen de contrataciones del Estado y la realidad social y económica

El régimen de contrataciones no constituye un elemento aislado dentro del contexto económico, jurídico y político de un país; por el contrario, está directamente vinculado a factores decisivos en el desenvolvimiento de la vida del Estado y la sociedad. En esos ámbitos, las adquisiciones del Estado influyen y son influidas por factores tan diversos como las fluctuaciones de los mercados, la sobreoferta o escasez de ciertos productos, las políticas de integración y promoción regional o los cambios en las estructuras del Estado.

Intentando delimitar los distintos ámbitos de interrelación entre los sistemas de contratación y el resto de la realidad social, podríamos afirmar que uno de los principales puntos de contacto se verifica respecto al sustento ideológico del Estado. En efecto, tal como lo señala José Roberto Dromi (La licitación pública, Ed. Astrea, 1989, pág. 544) "En los regímenes políticos varía, en función del factor ideológico predominante (autoridad o libertad) el procedimiento administrativo de contratación. Así, en el Estado liberal los procedimientos son rígidos o semirrígidos, lo que explica que la licitación pública sea el principio general en la materia, tal como ocurre en nuestra legislación; por el contrario, en el Estado intervencionista o de economía dirigida, los procedimientos son más elásticos o flexibles, pues lo que a éste le interesa es la libre elección de sus contratantes...".

Este principio general, con ser cierto, adquiere relatividad al confrontarlo con la realidad de cada país en un momento histórico concreto y con la de Argentina en los últimos años en particular. Ocurre que la licitación pública está considerada como el sistema de contrataciones del Estado que ofrece mayores garantías de competencia, publicidad y libre concurrencia a los oferentes y, correlativamente, otorga al Estado el medio más idóneo para obtener la mejor relación entre precio y calidad en sus adquisiciones.

En rigor, los demás procedimientos (licitación privada, contratación directa, contratos interadministrativos, etc.) aparecen principalmente como excepciones o son mecanismos derivados y simplificados de la licitación pública.

Pero la realidad condiciona los basamentos ideológicos y hemos visto cómo, aun utilizando procedimientos de licitación pública y dando cumplimiento formal a las

prescripciones legales, llegaron a extenderse significativamente en las compras que realizaba el Estado (nacional, provincial o municipal) en Argentina prácticas como el pago de precios excesivos, reconocimiento de actualizaciones absurdas, falta de control del cumplimiento de las obligaciones contraídas, moras significativas, trabas burocráticas injustificadas para poder inscribirse en los distintos registros de proveedores, falta de transparencia en los procedimientos, etc. todo lo cual terminó redundando tanto en perjuicio del Fisco como de los cocontratantes honestos y eficientes.

Entre los principales factores que contribuyeron, a lo largo de las tres últimas décadas, a distorsionar y/o desactualizar los mecanismos de contratación vigentes en el país pueden distinguirse:

a). Los fenómenos inflacionarios, hiperinflacionarios, saltos y variaciones en el tipo de cambio o en las normas arancelarias: introducían permanentes distorsiones en los contratos de cumplimiento extendido en el tiempo. En muchos casos se trataba de cambios sustanciales respecto de las condiciones o las reglas de juego vigentes en el momento en que se formuló la oferta o se perfeccionó el contrato y derivaban, lisa y llanamente, en la imposibilidad de cumplimiento, graves demoras en la entrega de suministros o la realización de obras por parte del cocontratante y de moras e incumplimientos simétricos por parte del Estado ante su estrangulamiento financiero, con su secuela de gravosos pleitos.

Como consecuencia directa de este fenómeno se desarrolló un sistema perverso que llevaba a la cotización de precios exorbitantes por parte de los proveedores que así se cubrían de los previsibles atrasos del estado para efectuar los pagos, operando como un "seguro antiinflacionario". Esto tenía su correlato en los procesos de evaluación de ofertas ya que no podía considerarse como más convenientes a las de menor precio ya que los menores costos podían significar una grave imprevisión por parte del proveedor que luego tornaran de cumplimiento imposible su prestación.

Adquirían así importancia los registros de proveedores y contratistas del Estado, a fin de precalificar en base a la solvencia y antecedentes y brindaban la posibilidad de sancionar o excluir a las firmas en caso de incumplimiento.

En la práctica, la discrecionalidad puesta en manos de niveles intermedios, e incluso inferiores, de la administración generó trabas burocráticas desmedidas y una enquistada corrupción a la hora de decidir una inscripción o exclusión de los registros, de considerar ofertas o de otorgar ajustes en los precios.

b) El avance científico-tecnológico verificado constantemente en las últimas décadas complejizó cada vez más las normas y especificaciones técnicas de bienes y servicios, exigiendo mayor precisión y rigor en la confección de los pliegos y en el proceso de evaluación de ofertas, y relativizando la importancia del precio como

factor determinante a la hora de determinar la oferta más conveniente. También aparecieron y desarrollaron nuevos contratos, como la adquisición de publicidad o de servicios técnicos especializados, como los de consultoría, que hacían necesarios procedimientos específicos.

1.1.2. Crisis del sistema de contrataciones y propuestas de modificaciones

El conjunto de los factores apuntados fue determinando la crisis del sistema de contrataciones vigente a nivel nacional a mediados de la década pasada, constituido principalmente por:

a) Ley de Contabilidad, Decreto Ley N° 23354/56, ratificada por Ley N° 14467 y reglamentada por el reglamento de Contrataciones del Estado, Decreto 5720/72.

b) Ley de Obras Públicas N° 13064

c) Ley de Concesión de Obra Pública N° 17520

d) Ley de contratación de servicios de consultoría N° 22460.

e) Régimen especial de contrataciones de las Fuerzas Armadas, leyes 20124 y 20455

Cabe aquí la aclaración que con ser las normas enumeradas las de mayor importancia no agotaban la enumeración de la legislación y reglamentación vigente a nivel nacional ya que las sociedades de economía mixta regidas por el Decreto Ley 15349/46, ratificado por Ley N° 12962; las empresas del Estado contempladas en la ley N° 13653 o por sus respectivas leyes de creación, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o simple regidas por la Ley de Sociedades N° 19550 y las sociedades del Estado regidas por la Ley N° 20705, contaban con reglamentos de contrataciones propios o adoptaban parcialmente los derivados de la legislación nacional, sumándose a ello la legislación y reglamentación de cada ámbito provincial y municipal.

Cierto es que los principios que rigen este tipo de compras son comunes y se refieren fundamentalmente a la publicidad del proceso, la libre concurrencia y la igualdad de los oferentes, pero las diferencias en el procedimiento son importantes y la poca claridad en la convocatoria o en los pliegos tría aparejada muchas veces la confusión sobre la legislación aplicable. Se sumaba así a la desactualización y fallas en la legislación este problema adicional de su dispersión que llevaba a que el proveedor cuya acción se extendía a más de un ente estatal o en más de una jurisdicción a tener que regir su accionar por legislaciones distintas.

Tanto desde el campo de la doctrina jurídica como desde los sectores interesados fueron surgiendo propuestas de modificaciones que modernizaran la legislación y permitieran eliminar falencias y vicios enquistados, por un lado, y que permitieran, en segundo lugar, la unificación de los procedimientos de contrataciones del Estado nacional, provincial y municipal y de las empresas y sociedades del Estado, de todo el sector público en definitiva, en un reglamento de contrataciones unificado.

a) Necesidad de unificar el régimen de contrataciones Anteproyecto de Reglamento Unificado de Compras del Estado. Se creó consenso respecto a la necesidad de elaborar un régimen jurídico único para las contrataciones del Estado, válido para todas las contrataciones y para todo el sector público. Dice Dromi (op. citado, pág. 541) al respecto que: "Consecuencia obligada es la necesidad de dictar una Ley General de Contratos del Estado que los regule integralmente, con un régimen básico y variantes técnico-jurídicas concretas para cada contrato: empleo público, empréstito, concesión de servicio público, obra pública, concesión de obra pública, suministro, mutuo hipotecario, mutuo prendario, contratos aleatorios, transporte, fianza, depósito, mandato, compraventa, locación de servicios, locación de cosas y cuasicontratos. Sólo así se superará la crisis normativa actual que, con una pluralidad de regímenes aplicables a la contratación administrativa, ni siquiera reguladora de todos los contratos, y con cláusulas imprecisas, contradictorias y remisiones en bloque al derecho privado, soslaya el problema y difícilmente proporcione soluciones adaptables a los negocios públicos".

Como un aporte en este sentido, José Víctor Casella formula el Anteproyecto de Reglamento Unificado de Compras del Estado que recoge las sugerencias de la Subcomisión de Reglamento de la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) y de los técnicos de la Secretaría de Hacienda, elaboradas en 1975 y 1976, y propuso la unificación en un cuerpo único de la reglamentación de todos los contratos (excepto obras públicas) de los entes de nivel nacional, provincial y municipal e intentaba encontrar respuestas para las consecuencias del primer fenómeno hiperinflacionario argentino de junio de 1975 sobre los contratos pactados en ese entonces a precio fijo.

Contemplaba la modificación de las leyes de contabilidad y demás leyes locales para adecuarlas al reglamento unificado, formalizando su adopción a través de leyes de adhesión de las legislaturas nacional y provinciales e incluía disposiciones unificando un Registro Centralizado de Proveedores por jurisdicción, las formas de publicidad, plazos en el proceso, formas de garantía, etc.

b) Proceso de normalización y control de calidad a través del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM). Como se dijo precedentemente, el avance científico y tecnológico llevó a complejizar cada vez más las normas y especificaciones técnicas y requirió del Estado un esfuerzo para

adaptarse a este avance y permitir que las distintas reparticiones del Estado tuviesen una fuente segura a la hora de precisar los artículos a adquirir. Este objetivo pudo cumplirse, en gran medida, gracias al IRAM, entidad civil sin fines de lucro que dicta las normas sobre condiciones y calidades que debe reunir un artículo determinado, en un proceso donde intervienen técnicos y científicos, fabricantes, consumidores y funcionarios del Estado. .

Hubo en el ámbito estatal distintos intentos para unificar y precisar las normas y especificaciones técnicas pero no fructificaron y ya la Comisión Nacional de Uniformación de Materiales, de carácter interministerial y creada por Decreto 121.430/37, adoptó casi 700 normas IRAM, en cumplimiento del Art. 4º del decreto aludido que establecía que "... La Comisión Nacional de Uniformación de Materiales se servirá del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales como organismo centralizador para el estudio técnico-científico de normas, a los efectos de mantener la uniformidad de sistemas y criterios de su confección".

En el mismo sentido, el Decreto 9789/57 declaró (Art. 6º) "... obligatorio para la Administración nacional, a partir de la fecha de publicado el presente decreto, el empleo de las normas técnicas adoptadas por la Comisión Nacional de Uniformación de Materiales".

A partir de allí, numerosos reglamentos de contrataciones de orden nacional (incluyendo el Decreto 6900/63 reglamentario de la Ley de Contabilidad y el que lo sucedió y se encuentra en vigencia, Decreto 5720/72) provincial y municipal incorporaron la obligación de respetar las normas IRAM para las compras.

Un nuevo paso en pro de mejorar la calidad de los bienes adquiridos y de unificar los estándares de compras se dio con la adopción de distintas jurisdicciones del control de calidad sobre los productos mediante la exigencia del sello de "Conformidad con las Normas IRAM" y de la certificación de la entidad de "Conformidad de lotes". En el orden nacional el Decreto 2181/78 estableció una nómina de productos que sólo podían adquirirse cuando contaran con el Sello de Conformidad con las Normas IRAM (Art. 1º) y autorizó a establecer una preferencia de hasta el 5% en el precio para los productos excluidos de la nómina pero que contaran con el Sello (Art. 2º).

Es de considerable importancia el aporte hecho por la adopción de las normas y controles de calidad sobre los productos de IRAM, en el perfeccionamiento y la unificación de la reglamentación entre las distintas jurisdicciones a lo largo del tiempo, y de lo que puede lograrse aún en la materia.

c) **Contrataciones para entes bilaterales y organismos internacionales.** A partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial se crean diversos organismos de carácter político supranacional como la Organización de las Naciones Unidas y la

Organización de los Estados Americanos (OEA) y, dependientes o al margen de ellos, otros destinados a promover el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos, como el Banco Mundial (BM); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), etc. de los que la Argentina pasa a formar parte

Estos organismos desarrollaron sus propios mecanismos de contrataciones, recogiendo en muchos casos valiosas tendencias internacionales en la materia, y al contratarse con ellos en virtud de los programas destinados a nuestro país, tanto los organismos estatales como los proveedores locales fueron desarrollando una experiencia que les permitiría a estos últimos no sólo competir con éxito con los oferentes extranjeros sino también enriquecer las propuestas para mejorar nuestros mecanismos.

En un principio, la legislación argentina se ocupó principalmente de conceder medidas de fomento a los oferentes nacionales en licitaciones internacionales en el marco de programas con organismos internacionales. Así se dictaron las leyes N° 16879 para proyectos eléctricos; la N° 20.852 para aquellas financiadas por el BID; la N° 17574 para Hidronor; la N° 18243 para la Comisión Nacional de Energía Atómica, etc. Pero con el transcurso del tiempo este concepto se fue ampliando y en los contratos de préstamos con el BID aparecen cláusulas o reglamentos de contratación específicos, ya que al ser estos contratos verdaderos tratados internacionales tienen rango equivalente al de las leyes y pueden establecerlos.

En términos más generales, la ley N° 23396 que aprobó el tratado entre la República Argentina y el PNUD subordina los regímenes de contratación a utilizarse en los proyectos de desarrollo a realizar a la voluntad de las partes, al establecer (Art. I, 1) que el acuerdo "Se aplicará a toda asistencia del PNUD y a los Documentos del Proyecto u otros instrumentos (llamados en adelante Documentos del Proyecto) que las partes concierten para definir con más detalle los pormenores de tal asistencia y las responsabilidades respectivas de las partes y del Organismo de Ejecución en relación con tales proyectos".

Para despejar toda duda respecto a la libertad de las partes para adoptar la normativa que consideren más adecuada, el texto precisa (Art. X, 1) que "El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para que el PNUD, sus organismos de Ejecución, sus expertos y demás expertos que presten servicios por cuenta de ellos, estén exentos de los reglamentos u otras disposiciones legales que puedan entorpecer las operaciones que se realicen en virtud del presente Acuerdo...".

Idéntico proceso se verificó con los entes binacionales y, por estas vías, fueron adoptándose métodos de contratación modernos y adaptados a grandes emprendimientos con licitación internacional. Como ejemplo en este sentido pueden

mencionarse las disposiciones del Pliego de Condiciones Administrativas y Legales de la Comisión Técnica Mixta del Puente entre Argentina y Uruguay (COMPAU) "Puerto Unzué-Fray Bentos" del año 1970. En dicho Pliego se establecía, entre otras cosas, el sometimiento de las Partes a la jurisdicción de los tribunales de la República Oriental del Uruguay y a sus leyes, pero en los casos de carácter esencialmente técnico, ambas partes, de común acuerdo y por motivos fundados, podían someter el litigio a la resolución de árbitros.

I.1.3. MODIFICACIONES AL REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO DEL AÑO 1988

Recogiendo parte de las propuestas de modificaciones que habían ganado consenso en la doctrina y en los sectores vinculados a las contrataciones del Estado, en 1988 se dictan los decretos 812, 825; 826, 827 y las circulares 7 y 8 de la Contaduría General de la Nación

a) Decreto 812/88. Modificación a los regímenes de Compre Argentino y Contrate Nacional. Varía la constitución y reglamentación del funcionamiento de la Comisión Asesora Honoraria establecida por el decreto-ley 5340/63 de Compre Argentino y las disposiciones de la Ley N° 18875 de Contrate Nacional .

b) Decreto 825/88. Supresión del Registro de Proveedores del Estado (RPE). Modifica el Decreto 5720/72 y sustituye al RPE por dos registros: el Padrón de Proveedores y el registro de Sancionados, la intención de este cambio era suprimir un sistema tildado de burocrático, ineficiente y poco transparente, ya que al exigir como requisito previo e indispensable para contratar con el estado la Inscripción en el RPE limitaba libre concurrencia de los proveedores. En su reemplazo se estableció un sistema de registración automática, a través del Padrón de Proveedores, y de exclusiones sólo a partir del registro de penalizaciones en el Registro de Sancionados.

Introduce modificaciones en las sanciones por incumplimiento de los cocontratantes, estableciendo las de apercibimiento, suspensión e inhabilitación, con un régimen de rehabilitación a cargo de la Contaduría General; por último establece otras modificaciones menores y suprime diversos incisos del D. 5720/72, siempre con el fin de simplificar y transparentar los procedimientos.

c) Decreto 826/88. Régimen de publicidad. Innova al establecer un régimen de publicidad único para todo el sector público nacional, sea cual fuere la naturaleza jurídica del ente convocante, sancionando la obligatoriedad de la apertura pública de ofertas, la publicación de avisos de convocatoria y su exhibición mediante

carteleras, al igual que las preadjudicaciones y fijando medios de publicidad adicionales.

d) Decreto 827/88. Garantías, plazos de entrega, pliegos, marcas y preadjudicación. Modifica el D. 5720/72 elevando el porcentaje a cubrir por las garantías y los montos de las penas por incumplimiento; se reducen los plazos de entrega de los suministros; se fija una escala porcentual al monto estimado de la contratación para fijar el valor de los pliegos; se fija la regla de no exigir marca determinada para los productos, pero se admiten excepciones y, en lo que constituye una variación de importancia en el régimen, se sustituye el criterio de menor precio por el de *oferta más conveniente* para la preadjudicación lo que otorga al ente licitante libertad para hacer pesar criterios de calidad de la oferta, antecedentes profesionales del oferente, etc. construyendo con ellos una ecuación que los convine con el precio y permita obtener la oferta más conveniente en su conjunto.

El conjunto de estas modificaciones, si bien no estatuyeron un sistema integralmente nuevo y, a raíz de esta característica de reformas parciales, se produjeron problemas en su interpretación y aplicación, sin duda que constituyeron un aporte significativo en aspectos de importancia y abrieron el camino a una reforma de mayor envergadura. Esta reforma, sin embargo, se vería demorada por la necesidad perentoria de dar respuesta a los graves problemas que planteó la crisis que se abatía sobre la economía nacional a fines de la década pasada.

I.1.4. LEY DE REFORMA DEL ESTADO Y LEY DE EMERGENCIA ECONOMICA

Ante la magnitud de la crisis que se abatía sobre el país, el Congreso de la Nación dicta, a fines de agosto y comienzos de setiembre de 1989, respectivamente, la Ley N° 23696 de Reforma del Estado (LRE) y la N° 23697 de Emergencia Económica (LEE), ambas conteniendo disposiciones respecto a las contrataciones del Estado.

La segunda de las normas citadas sentaba principios de trascendencia jurídica al asimilar la emergencia económica por la que atravesaba el país con el concepto de fuerza mayor; en segundo término, hacía descansar la responsabilidad por la emergencia en el sentido de culpa concurrente, y prescribía la necesidad de un *sacrificio compartido* entre las partes, Administración y cocontratista, para salvar el contrato. Cabe recordar que, para entonces, el cumplimiento de estas obligaciones se encontraba en su mayoría paralizado por incumplimientos de una o ambas partes y, en muchos casos, en litigio.

En lo relativo a los contratos celebrados por el Estado con anterioridad al dictado de las leyes, estas premisas llevaban a una renegociación en la que ambas partes soportaran los perjuicios para poder normalizar su ejecución o a su rescisión:

a) **Emergencia administrativa.** Se declaraba en "estado de emergencia administrativa la prestación de los servicios públicos, la ejecución de los contratos a cargo del sector público..." (Art. 1º, LRE)

b) **Extinción por fuerza mayor.** Se facultaba a los ministros a la rescisión de los contratos "por razones de emergencia, que a los efectos de esta ley se considera constituyen causales de fuerza mayor según el régimen previsto en los artículos 54 de la Ley 13064 y 5º de la Ley 12910" (Art. 48, LRE), en el caso que no se pudiese salvar el contrato según lo dispuesto en el artículo siguiente.

c) **Recomposición del contrato.** Prescribía (Art. 49, LRE) un acuerdo entre comitente y contratista inspirado en el principio del *sacrificio compartido* entre las partes, tales acuerdos debían contemplar la adecuación del plan de trabajos a la disponibilidad de fondos de la Administración; la aplicación de factores de corrección sobre los certificados de variación de costos otorgados por el Estado; la refinanciación de la deuda en mora; la adecuación del proyecto constructivo a las necesidades de ahorro del erario; la prórroga de los plazos de ejecución y la renuncia del contratista a reclamar compensaciones por la reducción del ritmo o paralización de la obra o por variaciones de costos.

A su vez, respecto a los contratos a celebrarse con posterioridad a la sanción de la ley, ésta introducía nuevas reglas de juego acordes a la situación de emergencia:

a) **Suspensión del régimen de de Compre Nacional.** Se suspendió (Art. 23. LEE) los regímenes establecidos por el Decreto Ley Nº 5340/63 y por la Ley Nº 18875 y, en su reemplazo, se establece un margen de preferencia de hasta el 10 % en favor de la industria nacional, calculado sobre el valor nacionalizado de los bienes importados, incluyendo aranceles

b) **Privatizaciones.** Otro aspecto trascendente de esta normativa era la disposición de privatizar distintos entes del sector público, para ello se preveían distintos procedimientos de selección (Art. 17 y 18, LEE) y se sentaba el principio de que "La oferta más conveniente será evaluada no sólo teniendo en cuenta el aspecto económico, relativo al mejor precio, sino las distintas variables que demuestren el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad. A este respecto, las bases de los procedimientos de contratación podrán, cuando resulte oportuno, establecer puntajes o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación", reafirmando así la utilización del concepto de oferta más conveniente introducido por el Decreto 827/88.

c) Contrataciones de emergencia. Autorizaba temporariamente a los órganos de la Administración a contratar con un procedimiento de emergencia, previsto en la ley (Cap. V, LRE) para la provisiones de bienes, servicios, locaciones, obras, concesiones, permisos "y la realización de todo otro contrato que fuere necesario para superar la presente situación de emergencia. Los procedimientos de contratación en curso podrán continuar según su régimen o ser extinguidos o transformados para su prosecución según el procedimiento aquí previsto" (Art. 46). Esta procedimiento de emergencia preveía (Art. 47, LRE) que debían solicitar por lo menos dos ofertas o cotizaciones a empresas reconocidas, pero además aceptar otras ofertas espontáneas y que, de no superarse el monto establecido, se podía disponer la adjudicación y perfeccionarse el contrato sin la intervención previa de los órganos de control externo.

d) Concesiones. Actualizaba el régimen de concesión de obra pública de la Ley N° 17520, incorporando a su texto (Art. 58, LRE) la aclaración de que "podrán otorgarse concesiones de obra para la explotación, administración reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes, con la finalidad de obtención de fondos para la construcción o conservación de otras obras" y receptando, por primera vez, el concepto de iniciativa privada por el cual el oferente presenta la iniciativa que identifica el objeto del contrato y señala sus lineamientos generales.

I.1.5. LEY DE CONVERTIBILIDAD

A fin de obtener la estabilidad monetaria, cambiaria y de precios se dicta, en marzo de 1991, la Ley de Convertibilidad N° 23928 que incide directamente sobre los contratos en general, y para el tema que nos ocupa, del Estado en particular. A fin de obtener los objetivos referidos se precisa (Art. 7°) que "En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repontenciación de deudas, cualquiera fuere su causa"; a tal fin se derogan (Art. 10°) todas las normas legales o reglamentarias que establecían o permitían tales variaciones, extendiéndose tal derogación aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

Como puede observarse, mientras la Ley de Reforma del Estado permitía una negociación entre las partes a fin de compensar los intereses afectados por los desajustes de la economía aquí se sancionaba, sin posibilidad de contemplar situaciones particulares, la inamovilidad de los precios pactados originalmente. Esto llevó al insistente reclamo de los contratistas, especialmente de la obra pública, ya que la contemplación de los mayores costos estuvo siempre en la normativa de este contrato desde la Ley 13064.

I.1.6. NUEVA REGLAMENTACION SOBRE REDETERMINACION DE PRECIOS EN LA OBRA PUBLICA

Dada la falta de aceptación de parte de los contratistas del régimen de la Ley de Convertibilidad, se produjo la paralización de gran parte de la obra pública y el peligro de una inminente ola de pleitos. Ante ello, el Ejecutivo decidió rever la cuestión y dictó dos decretos a fin de superar la situación:

a) Decreto 1312/93. Establece un nuevo régimen a regir a partir de su dictado ya que, según sus considerandos, "resulta conveniente establecer un sistema que permita la redeterminación periódica de los precios en las contrataciones de obras públicas a largo plazo" que resulte compatible con la Ley de Convertibilidad e inspirado en los contemplados por la Ley de Obras Públicas N° 13064.

A tal fin establece (Art. 1º) que los precios de los contratos de obras públicas a licitarse, con excepción de las concesiones con régimen propio y cobro directo al usuario, podrán redeterminarse anualmente luego de transcurrido un año contado desde la fecha de la oferta; sin embargo, un 20 % del precio total del contrato se mantendrá fijo e inamovible (Art. 3º).

Para la redeterminación de los precios se autoriza a ponderar (Art. 3º), exclusivamente, determinados ítems según su incidencia en precio total y tomando los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Los ítems a considerar son: precio de los materiales y demás bienes incorporados a la obra; costo de la mano de obra y amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos

Por último, en una disposición también novedosa, dispone (Art. 4º) que los aumentos o reducciones en las alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales trasladables al consumidor final serán reconocidas o deducidas, respectivamente, del precio a pagar.

b) Decreto 1339/93. Considerando que "existen en todo el territorio nacional una importante cantidad de obras públicas paralizadas o semiparalizadas" que plantean la disyuntiva de rescindir los respectivos contratos o autorizar la redeterminación de los precios, se dispone (Art. 1º) autorizar que se acuerden nuevos precios para la ejecución de obras públicas ofertadas con anterioridad a la vigencia de la Ley de Convertibilidad.

Para tal fin se adopta el sistema consagrado en el Decreto N° 1312/93 pero, para el caso de no arribarse a un acuerdo con el contratista en un plazo de sesenta días, se dispondrá la inmediata rescisión de los contratos (Art. 4°).

Falta aún una evaluación del resultado obtenido por estos dos decretos y si realmente lograron la normalización de la relación de precio en los contratos de obra pública; más allá de ello falta también saber si este sistema de ajuste mediante índices será extendido también a otros contratos y, eventualmente, a la futura reglamentación en caso de aprobarse el proyecto de ley del Ejecutivo.

I.2. EL PROYECTO DEL PEN Y SU VINCULACIÓN CON LA REFORMA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE CONTROL DEL ESTADO NACIONAL

I.2.1. CONTENIDO DE LA REFORMA

En 1992 la Secretaría de Hacienda de la Nación dio a conocer el Programa de Reforma de la Administración Financiera Gubernamental (publicación homónima y de idéntica fecha) que apuntaba al logro de los siguientes objetivos:

- * lograr que la gestión del área se realice con economicidad, eficiencia y efectividad;
- * generar información oportuna y confiable para la toma de decisiones;
- * interrelacionar los sistemas de administración financiera con los de control interno y externo con la finalidad de facilitar la eficacia de éstos;
- * realizar la gestión de los recursos públicos en un marco de absoluta transparencia.

En el orden conceptual, definía a la administración financiera como "el conjunto de principios, normas, organismos, recursos, sistemas y procedimientos que intervienen en las operaciones de programación, gestión y control necesarias para captar los fondos públicos y aplicarlos para la concreción de los objetivos y metas del Estado en la forma más eficiente posible".

Considerando las estrechas relaciones e interdependencias existentes entre los sistemas que administran recursos financieros y los que administran recursos reales, destacaba el documento que para que la reforma de la administración financiera tuviese éxito era necesaria la coordinación de la reforma de los procesos de adquisición, administración y uso de los bienes y servicios.

A partir de tal concepción integral, el Programa incluyó en los sistemas de contrataciones y de administración de bienes a fin de su programación y diseño en forma interrelacionada con el de administración financiera gubernamental y siguiendo la misma metodología, previéndose las derogaciones y modificaciones necesarias a la Ley de Contabilidad vigente en ese momento.

En cuanto al ámbito de aplicación del Programa, abarcaba todo el sector público nacional no financiero: Administración central, organismos descentralizados

no empresariales y las empresas y sociedades no financieras del Estado, buscando además extenderse a las administraciones provinciales y municipales mediante su adhesión al tratarse de estados autónomos.

Se definía los sistemas comprendidos:

- * Sistema de Presupuesto
- * Sistema de Crédito Público
- * Sistema de Tesorería
- * Sistema de Contabilidad
- * Sistema de Contrataciones
- * Sistema de Administración de Bienes

Por separado se trataba la informatización de los sistemas y la capacitación y adiestramiento de los recursos humanos y, dada la necesidad de diseñar un sistema de información sobre la gestión financiera de todo el sector público argentino, incluyendo a provincias y municipios, se dieron las bases de un "Programa de trabajos para coordinar la reforma con las provincias y municipalidades"; éste tenía también como fin colaborar con los gobiernos de esas jurisdicciones que quisiesen reformar su administración financiera según el modelo propuesto por la Nación.

Se adoptó como premisa la necesidad de interrelacionar el accionar de los distintos sistemas a fin de superar la tradicional, y tan contraproducente, situación de que se comportaran como compartimientos estancos, integrando además los sistemas de control ya que éstos, en definitiva, no hacen más que seguir el accionar de los demás sistemas.

Otro de principios del Programa era el de centralización normativa y descentralización operativa para cada sistema. En el primer aspecto se preveía la definición de políticas, normas, metodologías y procedimientos generales y comunes para cada sistema, con las adaptaciones necesarias a cada ente público y sin perder de vista las características y contenidos de las diseñadas para los demás sistemas. A fin de garantizar una descentralización operativa reglamentada, se preveía la existencia de organismos periféricos alrededor del organismo central de cada sistema.

A fin de poner en marcha el Programa el Congreso sancionó, en base al proyecto enviado por el Ejecutivo, la Ley N° 24156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional, incluyendo los sistemas de Presupuesto, Crédito Público, Tesorería, Contabilidad y de Control interno y externo. Posteriormente, el

15 de diciembre de 1992, el Ejecutivo enviaba al Congreso el Mensaje N° 2392 acompañando el proyecto de ley de contrataciones del sector público, la que habrá de completar, juntamente con la referida a la administración de bienes del Estado, el marco normativo del Programa.

Así se comienza a dar respuesta al problema de las contrataciones del Estado en el marco de una reforma integral de la administración financiera capaz, de dotar al Estado de un conjunto de políticas, normas y sistemas a fin de administrar con eficiencia y transparencia los recursos que la sociedad pone bajo su potestad y custodia.

Es de suma importancia el concepto de interdependencia entre los sistemas ya que, como se expresa en el "Programa" de la Secretaría de Hacienda (pág. 22), "La experiencia en la reforma particular de cada uno de los sistemas demuestra que, para lograr una efectiva reforma de la administración financiera y de recursos reales, es necesario integrar los esfuerzos a través del desarrollo de normas, metodologías y procedimientos que a la vez de responder a las necesidades propias de cada sistema, consideren las necesarias interrelaciones con los restantes. Está comprobado que cuando las partes de un sistema están debidamente integradas con las de otros sistemas -sean éstos inferiores o superiores- el total opera en forma más eficaz y eficiente de lo que lo hacía la suma de las partes".

I.2.2. REFORMAS AL SISTEMA DE CONTRATACIONES

a) . Aspectos conceptuales

1. Definición del sistema. Adaptando la definición dada para los sistemas en general, se particulariza respecto al de contrataciones del Estado afirmando que está constituido por el conjunto de principios, normas, organismos, recursos y procedimientos que, mediante su operación, permiten al Estado obtener los bienes, obras y servicios que necesita para realizar su gestión. Se sienta aquí el principio de la unidad del sistema para la contratación de bienes, obras y servicios, superando la dispersión de la normativa vigente.

Destaca el documento que, en el contexto del Programa de Reforma adquiere singular significación el tratamiento a otorgar al sistema mediante el cual el Estado accede a los bienes, obras y servicios requeridos para su gestión, dado que se trata de reorganizar algunas de las actividades más postergadas y deterioradas que tienen a su cargo los organismos del Sector Público.

Avanza al individualizar los problemas e identificar como su como sus causas "la obsolescencia normativa, las deficiencias de gestión, especialmente en lo que hace a la planificación y programación, y la ausencia casi total del control que, en las actuales condiciones, está más dirigido a analizar la legalidad de los actos que a evaluar su oportunidad, mérito y conveniencia".

Observa que como consecuencia de las limitaciones señaladas es dable observar un Estado pasivo, demandante inerte y atomizado, incapaz de imponer su enorme capacidad de compra (constituye el mayor adquirente individual de bienes y servicios), sospechado por la opinión pública y tildado de ineficiente por la sociedad a la que debe servir.

Ya en el orden de formular una propuesta global que permita resolver la situación descrita propone la ejecución de un minucioso trabajo normativo, un considerable esfuerzo de implantación y la necesidad de capacitar a los recursos humanos involucrados.

2. Objetivos y características del sistema. Pese al concepto integrativo del conjunto de los sistemas interrelacionados y del conjunto de las contrataciones dentro de un único sistema, se destaca que el tratamiento de las contrataciones adquiere matices diferentes según sea su finalidad y, al respecto destaca para cada una de ellas:

bienes: interesa fundamentalmente en su adquisición la calidad y el precio;

obra pública: aquí, en cambio, son factores fundamentales la capacidad técnica y la capacidad económica de los contratistas, ya que ambas garantizarán la ejecución en condiciones satisfactorias de tiempo y costo;

consultoría: los factores determinantes resultan la calidad y capacidad técnica tanto de los recursos individuales como de los equipos de trabajo de los oferentes;

informática: destaca, en general, la necesidad de privilegiar la relación performance-costo y en lo que hace específicamente al hardware se buscará asegurar la mejor oferta técnica con posibilidades de interconectividad, fluida transmisión de datos y adecuado mantenimiento.

Es de destacar que, a más de la particularización señalada para cada tipo de contratación según su objeto, se da aquí importancia al factor tecnológico, en el caso de adquisición de informática, como un elemento nuevo a introducir en la legislación, dada su creciente complejidad y especificidad. Se trata de un antecedente importante porque situaciones análogas se plantean en otros rubros, como por ejemplo con las comunicaciones en general, con la integración de los sistemas informáticos y los de

telefonía, o con proyectos de investigación tecnológica y científica donde factores como calidad, solvencia o precio adquieren una significación distinta a la que poseen en las contrataciones tradicionales.

A fin de responder a la señalada unidad en la diversidad y de resolver los condicionamientos señalados previamente, se propone programar, diseñar e implementar el sistema, de tal forma que permita alcanzar los siguientes objetivos:

1. Fomentar y alentar la participación de contratistas y proveedores competentes en los procesos de contratación pública.

2. Promover la competencia entre contratistas y proveedores para el suministro de los bienes, la realización de las obras y la contratación de los servicios que hayan de adjudicarse.

3. Prever un tratamiento justo y equitativo para contratistas y proveedores.

4. Promover la corrección y equidad del proceso de contratación pública y la confianza de la sociedad en él.

5. Dotar de transparencia a los procedimientos de contratación pública.

6. Maximizar la eficiencia de la contratación pública en cuanto a la obtención de los bienes, obras y servicios con la mejor tecnología disponible, en el momento oportuno y al menor costo posible.

3. Condiciones operativas del sistema. Reafirmando el principio de centralización normativa y descentralización operativa que permita alcanzar los objetivos enumerados, se propone establecer un sistema de contratación de bienes, obras y servicios, dirigido por un organismo que proponga las políticas de compras del gobierno y establezca las normas que deben regir dicho sistema.

Anunciaba en ese momento el documento la elaboración del proyecto de ley y su reglamento a fin de regular las contrataciones de los bienes, obras y servicios del Estado, estableciendo las finalidades y el ámbito de aplicación del sistema, la organización y funciones generales de la unidad central normativa y de las unidades periféricas en las distintas instituciones de la administración pública nacional.

Contemplaba la formulación de políticas generales, el dictado de normas y procedimientos comunes a todos los organismos centralizados y descentralizados, y la descentralización operativa de la gestión de adquisición, almacenamiento y suministro, creando a tal fin una unidad central del sistema y define sus funciones fundamentales:

1. Proponer las políticas de organización y operación del sistema

2. Normar el sistema de contratación de bienes y servicios.
3. Evaluar el funcionamiento global del sistema.
4. Administrar el sistema de información.

Completando el diseño del sistema, definía las funciones de las unidades sectoriales:

1. Comprar, producir, almacenar y distribuir los bienes y servicios requeridos por el organismo al que pertenecen.
2. Coadyuvar en la operación y mantenimiento del sistema de información que se establezca y a la evaluación de su funcionamiento por parte de la unidad central.

Particularizando respecto al sistema de información de las contrataciones, se proponía fijar sus objetivos, los datos que debe contener y su diseño e implantación. En lo relativo a la metodología de planificación y ejecución de las compras, se definirán las bases de programación, el contenido del programa de contrataciones y las políticas sectoriales a aplicar.

Tomando uno de los flancos más criticados del sistema vigente, su morosidad en la gestión, se proponía agilizar los mecanismos de provisión de bienes y servicios; esta posibilidad se potencia por la estabilidad de precios que permitirá realizar las compras por el método de contratos funcionales, consolidados y abiertos, mediante los cuales, una vez convenido un precio, pueden variarse las cantidades a adquirir sin que aquel cambie. Aclaraba, sin embargo, que tal modalidad no se considerará excluyente de otras que modernas concepciones recomienden.

Insistiendo en la necesidad de superar los vicios del sistema vigente, se proponía agilizar y simplificar los trámites y reducir los tiempos de los procesos de contrataciones a fin de poder cumplir con eficacia y eficiencia los programas de acción aprobados.

Anunciaba que el contenido de la ley y el reglamento establecerían las modalidades de los contratos del Estado y los funcionarios autorizados a contratar, de acuerdo al tipo de bienes o servicios y al monto de las operaciones.

Reconociendo una de las propuestas más difundidas de la doctrina, proclama la necesidad de establecer un registro central de proveedores y contratistas del Estado, al que se incorporarán las personas físicas y jurídicas que puedan efectuar contrataciones por montos significativos, de tal manera que quienes participen en procesos licitatorios públicos estén registrados y evaluados globalmente en cuanto a su

capacidad económica y técnica y su solvencia jurídica. El registro estará soportado por una base de datos computarizada a la que tendrán acceso directo todas las dependencias del sector público comprendidas por el sistema. Podrán solicitar información sobre los antecedentes de los proveedores y contratistas registrados y deberán aportar información sobre los grados de cumplimiento y la calificación que aquellos reciban en función de la calidad de la obra o servicio ejecutado. Estos mecanismos, sometidos a auditoría, permitirán mantener permanentemente actualizados los datos de los proveedores de manera tal que sirvan como elementos de referencia válidos a los efectos de futuras contrataciones.

En un aspecto directamente vinculado a la programación y ejecución presupuestaria, se prevé que cada entidad elabore un plan de contrataciones.

En cuanto a las características del proceso, se establece que la nueva legislación y su reglamentación definirán las características de: los pliegos de licitación, la publicidad o invitaciones a cotizar, las propuestas, las muestras, las garantías de propuestas y contratos, la apertura de las cotizaciones, la adjudicación, el contrato, la entrega y recepción de los bienes, las condiciones del control de calidad, los elementos requeridos para la facturación y los pagos;

Se determina que existirá una normativa específica para los permisos y concesiones que otorga el Estado, para la locación de inmuebles, la contratación de obras públicas y la de empresas consultoras.

En relación con el Sistema de Contabilidad y con el de Administración de Bienes, se establece que el registro de las adquisiciones en la contabilidad general y el incremento o disminución de las existencias estarán directamente relacionados con el registro de la ejecución presupuestaria y constituirán la base sobre la que se desarrollará el sistema de información de los bienes de cada entidad. Detalla que para los bienes de uso común se utilizarán las técnicas de normalización, identificación y catalogación que resulten pertinentes, teniendo en cuenta la normativa y los avances logrados hasta el presente.

Recoge en este punto el Programa toda la rica experiencia acumulada en los rubros de normalización de materiales y control de calidad mediante la adopción de las normas IRAM a que hiciéramos referencia en el punto I.1.2. "b)".

A los fines de la racionalización de las compras, establece que la unidad central normativa establecerá en coordinación con las unidades operativas, un sistema de información sobre la oferta de bienes y servicios de uso y consumo común o de aquellos bienes específicos que se determine expresamente. Esta unidad también tendrá la función de evaluar el funcionamiento global del sistema de contratación de bienes, obras y servicios a fin de proponer oportunamente las medidas correctivas que fueren del caso.

4. Aspectos específicos. Respecto a cada una de las contrataciones, establece:

Obra pública: se dictarán normas que permitan una aproximación ágil y confiable al conocimiento de la capacidad técnica y económica de los contratistas, poniendo especial cuidado en establecer mecanismos de control y auditoría que mantengan permanentemente actualizados los datos sobre sus recursos humanos, de bienes de uso y grado de desarrollo tecnológico, en relación con el avance aportado por la experiencia internacional.

En cuanto al factor económico se deberá detectar por medios directos e indirectos los signos que proporcione el medio empresario y financiero acerca de la capacidad, solvencia, liquidez y otros indicadores de la situación de los eventuales contratistas a fin de preservar al sector público de las contingencias negativas que han sido recurrentes en su relación con los mismos.

En cuanto a las propuestas de trabajo se establecerá un mecanismo que permita evaluar en primer lugar la solvencia técnica de los oferentes y en una segunda instancia la obra programada y las condiciones económicas pretendidas.

Consultoría: el factor determinante a evaluar deberá ser la capacidad y calidad técnica de los eventuales contratantes. Deberá atender al juzgamiento tanto de la capacidad individual de los integrantes del conjunto de profesionales y técnicos propuestos como los antecedentes de trabajos realizados, concluidos y en operación. La capacidad individual, por su parte, será evaluada sobre la base de la definición de un banco de variables que pondere, en forma no excluyente, factores tales como el título de grado; la capacitación y desarrollo curricular posteriores; los conocimientos específicos con relación al objeto de la consultoría; la experiencia laboral, general y específica; las publicaciones efectuadas; los reconocimientos científicos recibidos y en general la pertinencia y aplicación de todo ello al trabajo de consultoría a realizar.

Informática: se encuadrará en las pautas analizadas precedentemente para los bienes y la consultoría; no obstante, cabe destacar que en esta materia adquiere particular relevancia la experiencia operativa de los oferentes y la capacidad empresarial para asegurar un adecuado mantenimiento de equipos y software, en consonancia con lo dicho en I.2.2. "a).2".

B. Actividades

1. Ley del Sistema de Contrataciones. Afirmaba en aquel momento el Programa que el proyecto a remitirse establecería los objetivos y el ámbito de aplicación del sistema, las funciones principales de la oficina que actuará como organismo rector del mismo y las de las unidades operativas, las diversas modalidades de contratación del Estado y las normativas básicas que se aplicarán a cada una de ellas.

2. Reglamento de la Ley del Sistema de Contrataciones. Como es comúnmente aceptado, gran parte del acierto y la efectividad de una legislación depende de su reglamentación. En el caso específico de la legislación sobre contrataciones esto es particularmente cierto, sobre todo si se considera el peso que factores técnicos y económicos reservados a la reglamentación pueden tener en el resultado del proceso de selección.

Como ejemplo baste señalar al respecto la decisiva importancia de las disposiciones del Decreto 5720/72 en el contrato de suministro y lo significativo de cualquier cambio en cuanto a montos de garantía, tipo y modalidad del registro o padrón de proveedores, etc. A raíz de ello, el Programa precisa algunos contenidos fundamentales de la futura reglamentación:

Normas comunes a los contratos de las entidades públicas: prevé normas reglamentarias en materia de modalidades de contratación, gestión de las mismas, autorizaciones y montos para contratar, registro de proveedores y otros aspectos específicos, etc.

Normas para la contratación de obra pública: entre estas normas se destacarán las que regulen la convocatoria; información a los interesados; forma de presentación de las propuestas; criterios de evaluación; seguimiento y control de la ejecución; auditorías técnicas y económicas; determinación de responsabilidades y sanciones; aprobaciones parciales y final; transferencia de acciones, etc.

Normas para la contratación de servicios de consultoría: en este rubro se incluirán normas sobre empresas consultoras extranjeras; consultoría con financiamiento de Organismos Internacionales; prohibiciones; presentación de propuestas; criterios de evaluación; auditorías técnicas, informes de avance y final (periodicidad, evaluación y aprobación); incompatibilidades.

Normas para la contratación de servicios de computación: particulariza aquí en temas respecto de los cuales no existían previsiones en la normativa vigente, en lo referente a:

compra o arrendamiento de equipos: entrega de equipos en uso a cuenta de precio; arrendamiento con opción a compra; especificaciones técnicas que deben contener y las licitaciones a fin de evitar pagos redundantes o innecesarios;

adquisición o diseño de software: características técnicas de los programas; documentación a acompañar; prueba de los programas; garantías de implantación y utilización.

3. Organización de la oficina nacional del sistema y oficinas periféricas: se definirá la estructura organizativa de la oficina y las funciones de sus unidades y se preverá la reorganización de las unidades de compras que ya poseen las instituciones públicas, en el sentido de lograr coherencia y homogeneidad organizativa con la unidad central, ya que dependerán de ésta desde el punto de vista normativo y técnico.

4. Organización del registro central de proveedores y contratistas del Estado: en este aspecto precisa que se definirán las características del registro, de la información a producir para la inscripción de los proveedores y contratistas que participarán en los procesos de contratación, la información que deben enviar las unidades operativas del sistema y la que proveerá el registro sobre precios referenciales, antecedentes y capacidad de producción y/o venta de los proveedores y contratistas, los mecanismos de evaluación y auditoría y las características de la base de datos ad-hoc.

5. Catálogo de bienes de uso común: volviendo sobre la aplicación de las tecnologías de normalización, identificación y catalogación se elaborará el catálogo aplicable a los bienes cuya utilización resulte común a la mayoría de los organismos del Estado, permitiendo de esta forma estandarizarla, con el consiguiente ahorro al disponerse de seguridad y precisión para la toma de decisiones en las compras.

6. Metodología para la programación de adquisiciones de bienes y servicios: recurre aquí nuevamente a relacionar las contrataciones con dos de los aspectos decisivos del programa en lo referido al Sistema de Presupuesto: la programación y la ejecución. Al respecto, precisa que la metodología establecerá los mecanismos fundamentales para programar la gestión de adquisición de bienes y servicios, en función de las metas anuales previstas, su relación con la programación de la ejecución del presupuesto, los stock críticos y el tiempo o período de contratación, de acuerdo con la modalidad de adquisición que sea necesario aplicar.

7. Manuales de contratación: precisa la necesidad de elaborar los manuales descriptivos de los procedimientos técnicos normalizados a los que deberán ajustarse los organismos para la contratación de: bienes y servicios generales; obra pública; servicios de consultoría; equipamiento y servicios informáticos y de otros bienes y servicios específicos a determinar, como los de comunicaciones, etc.

8. Manuales de recepción de bienes de uso y de consumo: identificando otro de los momentos clave del proceso de adquisición prevé la elaboración de los manuales de procedimientos de recepción de bienes de uso, de consumo y de servicios, los que establecerán las responsabilidades de los agentes intervinientes en los mismos, las formalidades documentales del acto de recepción, los controles cualitativos y cuantitativos a efectuar, las conformidades u observaciones a realizar y todo otro aspecto que haga a la evaluación del cumplimiento por parte de los proveedores y contratistas. No es casual en este aspecto la referencia a la responsabilidad de los

agentes intervinientes en la recepción ya que este es uno de los aspectos clave para poder controlar el cumplimiento del cocontratante.

9. Manuales de administración de almacenes: prescribe que éstos contendrán las normas y procedimientos de administración de los almacenes con el objetivo de lograr la más alta eficiencia en la gestión de las existencias. Estos manuales identificarán las características propias de las modalidades de administración de los bienes de uso; de consumo; durables o perecederos, de bienes de rezago y para venta, etc.. Los manuales especificarán, entre otros aspectos, los métodos de valuación, los registros del inventario permanente, las solicitudes de compra para reposición de stock y la información financiera a producir para su integración al sistema de información financiera, etc.

10-Sistema de información de precios: se trata aquí de uno de los aspectos instrumentales de mayor significado económico ya que, pese a ser el sector público el principal comprador en la economía argentina, se da la paradoja que, en general, compra mal y precios excesivos. Para revertir esta situación se propone el diseño de un sistema de información de precios referenciales de bienes y servicios de uso común a fin de informar sobre precios vigentes en el mercado y facilitar la identificación de los posibles proveedores.

Este también uno de los temas de mayor relevancia para la integración de un sistema común con las jurisdicciones provinciales y municipales ya que redundaría en beneficio de todas ellas el contar con esta información en tiempos reales y poder comparar con los precios vigentes en cada plaza del país.

I.3. ANALISIS DEL NUEVO REGIMEN DE CONTRATACIONES DEL SECTOR PUBLICO PROPUESTO

I.3.1. OBJETIVOS

Habiendo analizado en detalle, en el punto anterior, el contenido reservado por el Programa de Reforma de la Administración Financiera Gubernamental para el Sistema de Contrataciones, revisaremos en el presente el contenido del proyecto remitido por el Ejecutivo al Congreso de la Nación.

Cabe reiterar que dado el alcance dado al nuevo sistema, al abarcar prácticamente a la totalidad de las compras del Estado, habrá de depender para su eficaz puesta en marcha de una acertada reglamentación. No faltan al respecto previsiones en el "Programa..." de la Secretaría de Hacienda pero éstas, lógicamente, no se vuelcan en el texto de la norma sino en su posterior reglamentación; como consecuencia, el texto del proyecto de ley debe verse a la luz del Programa que hemos analizado.

En cuanto a los objetivos en sí, expresa el Mensaje N° 2392 del 15 de diciembre de 1992 que acompaña el proyecto de ley que se trata de establecer un sistema compatible con la reforma a la administración financiera establecida por Ley N° 24156, tomando los principios de centralización normativa y descentralización en la ejecución.

Remarca también el mensaje que se consultó a la doctrina del derecho administrativo y a "la moderna concepción de los contratos del Estado nacional dentro del derecho público".

Sitúa a la fluidez de la información entre los mercados y el sector público como factor clave, al permitir eliminar la brecha tradicional entre los precios pagados por el sector público y el privado por los mismos productos.

Como una segunda, y no menos importante, derivación de esta conexión entre las condiciones del mercado y las compras públicas ubica a la lucha contra la corrupción en todas sus manifestaciones, ya que el instrumento más poderoso para ella es precisamente, la transparencia que da la información fluida.

El referido aspecto de la obtención, centralización y distribución de la información como así también la centralización de las políticas, la normativa, el control y la evaluación, están ligadas al papel a cumplir por la unidad central del sistema, mientras que las acciones concretas quedan en manos de las unidades operativas, utilizando, según expresa en Mensaje, "una de las prácticas más modernas dentro de las actividades de la administración, utilizada en los países de avanzada".

Destaca la aplicación a todo el sector público nacional del sistema, incluyendo a los poderes Judicial y Legislativo, lo que recoge un antiguo reclamo de la doctrina en pro de la unidad de la normativa, pero preservando la individualidad de los poderes al quedar reservada a éstos la reglamentación en su esfera.

Remarcando el intento por superar los vicios enquistados en el sistema vigente, destaca la necesidad de fomentar la participación de contratistas y proveedores promoviendo la competitividad y lograr la corrección, flexibilidad y transparencia del procedimiento para asegurar un tratamiento justo y equitativo a los interesados.

Erige como uno de los principios del nuevo sistema la *razonabilidad de la contratación para cumplir con el interés público comprometido* destacando la necesidad e la prevalencia de la verdad sustancial por sobre la verdad formal y haciendo responsables de todo ello a los funcionarios públicos intervinientes.

I.3.2. AMBITO DE APLICACION

El artículo 1º consagra la referida unidad legislativa en la materia para todo el sector público nacional, al disponer que "Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo el sector público nacional" dentro del que enumera la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, en todos sus tipos; los poderes Judicial y Legislativo y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

I.3.3. CONTRATOS CONTEMPLADOS

Consagra un régimen común para los contratos: (Art. 2º) "El sistema que se establece se aplicará a las contrataciones de suministros, servicios, obras, concesiones de obra y servicios públicos, consultoría, compraventa de bienes y locaciones que realicen las entidades mencionadas en el artículo 1º, con excepción de la relación de empleo público".

I.3.4. ORGANIZACION DEL SISTEMA

Reafirma aquí (Art. 4º) uno de los principios medulares de todo el Programa: "El Sistema de Contrataciones del Estado Nacional se organizará en función de los criterios de centralización normativa y descentralización operativa, a este fin se constituirán:

a) Una unidad central de contrataciones en jurisdicción del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

b) Las unidades operativas que funcionarán en las áreas de administración de cada uno de los ministerios, de la Presidencia de la Nación y de los poderes o de las entidades comprendidas en el artículo 1º, las que estarán a cargo de la gestión de contrataciones.

1.3.5. FORMAS DE SELECCION

Establece aquí, como principio general, la inexistencia de un sistema con excepciones, sino la vigencia paralela de distintas modalidades, aplicables según el objeto de que se trate. Constituye ésta una solución distinta a la vigente en la Ley de Contabilidad de la Nación que considera a la licitación pública como la norma y a los demás (licitación privada, contratación directa) como excepciones.

a) Formas de selección. Al respecto, el Art. 8º precisa: "La selección del contratista podrá realizarse mediante los siguientes sistemas:

a) Licitación;

b) Concurso;

c) Contratación directa;

d) Concurso de proyectos integrales;

e) Remate o subasta".

b) Contratos consolidados abiertos funcionales. A fin de aprovechar el poder de compra que concentra el Estado, y a coordinarse con la necesaria programación de las contrataciones, se establece este sistema: (Art. 20) "Las contrataciones consolidadas abiertas funcionales se realizarán en aquellos casos en que dos (2) o más entidades de las mencionadas en el art. 1º requieran una misma prestación y se le asigna a una de ellas la gestión del proceso de contratación hasta la adjudicación, con el fin de obtener mejores condiciones que las que obtendrían las entidades individuales".

Esta modalidad de contratación permite, como señala el "Programa...", agilizar los mecanismos de provisión de bienes y aprovechar la estabilidad de precios ya que, una vez fijado el precio por este sistema, pueden variarse las cantidades a adquirir sin que aquel cambie.

c) Contratación de profesionales y técnicos. Distingue aquí permitiendo un régimen especial para un contrato en que las condiciones personales son determinantes: (Art. 21) "La contratación de profesionales y técnicos, nacionales o extranjeros, bajo el régimen de contrato de locación de servicios, podrá efectuarse en forma directa, en las condiciones que disponga la reglamentación, cuando su notoria competencia y experiencia estuviera fehacientemente comprobada y fundada en forma expresa".

d) Reglamentación. Concentra aquí en la cabeza de cada poder la potestad reglamentaria, superando sobre todo la dispersión existente en el ámbito del Ejecutivo donde empresas, sociedades y otros entes retienen esta facultad: (Art. 24) "Es competencia del Poder Ejecutivo nacional reglamentar los requisitos básicos que deben regir las contrataciones del Estado Nacional, preservando los principios enunciados en el art. 3° y las bases organizativas del sistema establecidas en el art. 4° de esta Ley. El Poder Legislativo y el Poder Judicial dictarán sus propios reglamentos dentro del marco establecido por la presente".

1.3.6. OTROS ASPECTOS

Como consecuencia de la puesta en vigencia de la ley serían derogados, juntamente con sus reglamentaciones (Art. 23):

a) Artículos 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, y 63 de la Ley de Contabilidad (Decreto Ley 23354/56).

b) Artículo 9° de la Ley de Obras Públicas N° 13064.

c) Artículo 4° de la Ley de Concesiones de Obra Pública N° 17520 (modificada por la ley 23696).

d) Artículo 12 de la Ley de Contratación de Consultorías N° 22460.

I.4. ALCANCE DE LAS PRINCIPALES REFORMAS A INTRODUCIR CON EL NUEVO SISTEMA

Como quedó dicho en el punto anterior, el proyecto de ley debe verse a la luz del Programa de Reforma, éste determina con detalle el contenido de la legislación y de su reglamentación, todo lo cual constituye un sistema integral y armónico.

Al analizar las principales reformas al sistema vigente, sin embargo, pueden advertirse las líneas fundamentales que definen un mecanismo que recoge las innovaciones que han ganado consenso en la doctrina del derecho administrativo.

I.4.1. UNIDAD DEL SISTEMA

Comienza el proyecto por sancionar a todo el sector público nacional y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como su ámbito de aplicación. A ello debe agregarse que el "Programa..." de la Secretaría de Hacienda prevé un Programa de Trabajos para Coordinar la Reforma con las Provincias y Municipalidades.

El conjunto permitirá la aplicación de los principios de centralización normativa y descentralización de la ejecución que posibilite una ágil gestión para las adquisiciones del Estado. En el mismo sentido, esta integración de todo el sector público nacional, y su posible coordinación con las jurisdicciones provinciales y municipales, permitirá el intercambio fluido de información de los mercados a escala nacional, redundando en la consecución de mejores productos, a mejores precios y en el momento adecuado.

La puesta en marcha de un registro central de proveedores posibilitará, como otro fruto de la unidad del sistema, la registración y evaluación previa de la solvencia jurídica y la capacidad económica y técnica de los participantes en los procesos de adquisición. Se registrarán también los antecedentes de cada contratista o proveedor en anteriores obligaciones contraídas con el Estado y las sanciones por incumplimiento.

Esta unidad también será de marcada utilidad a la hora de elaborar el plan anual de contrataciones, relacionado a la ejecución presupuestaria, a tal fin se advierte la utilidad de concentrar toda la información del sector público nacional y demás jurisdicciones participantes ya que el mismo proyecto prevé (Art. 20) la realización de contratos consolidados abiertos funcionales para el caso de que dos o más unidades requieran de la misma prestación; en tal caso se le asigna a una de ellas la gestión de la contratación, con el consiguiente ahorro procesal y la posibilidad de conseguir precios y condiciones acordes a la magnitud de la contratación.

Para el Estado, en fin, esta unidad permite integrar realmente un sistema en el cual cada componente cumpla una misión en relación al conjunto, evitando superposiciones y desgastes jurisdiccionales inútiles; permite también, a través del sistema de información que se prevé en paralelo, instrumentar la planificación previa de las contrataciones, su incidencia presupuestaria, su oportunidad y la posibilidad de concentrarlas, como así también la evaluación a posteriori de su ejecución a fin de ir corrigiendo y perfeccionando el sistema.

Del lado de los proveedores y contratistas esta unidad del sistema viene a satisfacer un antiguo reclamo, ya que quienes pretendían contratar con el Estado se veían sometidos a distintas normativas para cada ente ante el cual se presentaban. se podrá contar no sólo con una única normativa en la materia sino también con un organismo central encargado de su interpretación y programación.

Debe salvarse en este punto la facultad de los poderes Judicial y Legislativo y de las jurisdicciones provinciales y municipales que integren el sistema, de dictar su propia reglamentación, pero no existen obstáculo para que todos los componentes acuerden previamente lineamientos comunes para la reglamentación.

I.4.2. CONTRATOS INCLUIDOS

El proyecto, al fijar un régimen común para los contratos de suministros, servicios, obras, concesiones de obra y servicios públicos, consultoría, compraventa de bienes y locaciones permite simplificar el actual universo legislativo en la materia, el que regla estos contratos a través de una media docena de leyes originales, sus modificatorias y sus respectivas reglamentaciones.

Advierte el "Programa..." que el tratamiento de las contrataciones requiere matices diferentes según sea su finalidad, destacando para cada caso los factores preeminentes a la hora de evaluar propuestas: calidad, precio, capacidad técnica y económica del contratista, capacidad técnica de los individuos y del equipo de trabajo, compatibilidad de equipos y tecnologías, etc.

Prevé en tal sentido la Secretaría de Hacienda el dictado de una reglamentación común para todas las contrataciones en materia de modalidades, gestión, autorizaciones y montos para contratar, registro de proveedores, etc. y de normas particulares para cada contrato.

De lo dicho se desprende que, si bien es auspiciosa la adopción de un régimen común para los contratos, con excepción del empleo público, su reglamentación habrá de tener en cuenta las particularidades de cada uno a fin de que el proceso de selección se adecue a las

características de su objeto. Lo contrario supondría, una vez más, dar prevalencia a la verdad formal sobre la verdad sustancial, imponiendo una uniformidad forzada.

A fin de sortear este riesgo será de gran utilidad recoger la experiencia práctica acumulada hasta el presente en cada contratación, corrigiendo desviaciones y promoviendo el ajuste de la legislación marco a las características particulares de cada contrato.

I.4.3. RAZONABILIDAD DE LAS CONTRATACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES

Reiteradamente se ha afirmado, y los hechos lo han corroborado, que el estado compraba mala calidad a altos precios e inoportunamente; sin embargo, al revisarse el procedimiento empleado se encontraba que nno existían objeciones que realizar desde el punto de vista de la legalidad de la contratación. Existe una reiterada prevalencia de la verdad formal por sobre la verdad sustancial, que permite al funcionario excusar su responsabilidad pretextando que el proceso de contratación se desarrolló "según marca la ley", aunque de ello se derive un grave perjuicio fiscal.

Si bien es indiscutible el componente de legalidad que debe respetar el proceso, éste por sí no debe decidir una contratación ya que tanto la legislación vigente como la que se propone instaurar reconocen al Estado la posibilidad de desistir de la contratación cuando es evidente que ha existido colusión o cuando los precios ofertados están por encima de las estimaciones, entre otras causales.

No existe, por lo tanto, excusa alguna que permita contratar en evidente desventaja y en tales casos es responsabilidad del funcionario actuante responder por el mérito, oportunidad y conveniencia de cada contratación. Habrá de definirse aquí el nexo entre el Sistema de Contrataciones y los de control interno y externo instaurados por la nueva Ley de Administración Financiera.

A todo ello apunta el artículo 3º del proyecto de ley al establecer, entre los principios a que deberán ajustarse las contrataciones: "e) Razonabilidad de la contratación para cumplir con el interés público comprometido" y "f) Responsabilidad de los agentes y funcionarios que autoricen, dirijan o ejecuten las contrataciones".

Al respecto, el artículo 7º establece la responsabilidad primaria en la materia, al definir que "La unidad operativa estará a cargo de la gestión de contratación, pero la adjudicación será resuelta por la autoridad competente de cada entidad, que además supervisará su actuación y será responsable de ello.

Agrega el citado artículo que "El titular de cada unidad operativa será responsable del cumplimiento de los principios del artículo 3º y las normas y procedimientos establecidos y adoptará los recaudos que aseguren su eficiencia con la tecnología adecuada a las necesidades y al menor costo posible. Podrá requerir el asesoramiento de especialistas en temas de costos, auditoría, ingeniería, legales y demás conocimientos específicos que estimen necesarios para el eficiente cumplimiento de sus funciones a fin de asegurar la eficacia, mérito u oportunidad de las mismas".

Este enunciado define un amplio marco de responsabilidad, al indicar cuáles funcionarios están habilitados para contratar, e involucrar específicamente conceptos relativos al costo, adecuación tecnológica y deber de supervisión sobre el proceso. Sin embargo, esta no es una enumeración taxativa ya que, en el último párrafo del artículo, queda claro que el deber del funcionario responsable es el de asegurar la eficacia, mérito u oportunidad de la contratación, pudiendo solicitar para ello el auxilio de peritos en la materia de que se trate.

Como se dijo, en la reglamentación deberá efectuarse el cruzamiento de estas disposiciones con las relativas al los sistemas de control interno y externo y, definirse con mayor precisión las responsabilidades de los titulares de las unidades operativas y de los entes en el proceso.

1.4.4. ORGANIZACION DEL SISTEMA

El diagnóstico de la situación del sistema de contrataciones indica que se trata de una de las actividades más postergadas y deterioradas del sector público y, sin duda, de ello se deriva un grave perjuicio para las finanzas públicas. Entre las principales causas de esta situación se encuentra la deficiencia de gestión, especialmente en lo que hace a la planificación y programación, según lo afirma el "Programa...".

Agrega el documento que "Como consecuencia de las limitaciones señaladas es dable observar un Estado pasivo, demandante inerte y atomizado, incapaz de imponer su enorme capacidad de compra (constituye el mayor adquirente individual de bienes y servicios), sospechado por la opinión pública y tildado de ineficiente por la sociedad a la que debe servir". Como puede colegirse fácilmente, en todo el panorama descripto está presente el factor organizativo.

Como respuesta, se propone la existencia de un único Sistema de Contrataciones para el sector público nacional, extensible a las provincias y municipios de prosperar el programa de trabajos propuesto a tal fin. Este sistema se estructuraría en torno a una unidad central, en jurisdicción del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, que propondría las políticas de organización y operación del sistema; dictaría las normas para la

contratación de bienes y servicios, evaluaría el funcionamiento global del sistema y tendría a su cargo el sistema de información. Esta unidad deberá coordinar su accionar con los poderes Legislativo y Judicial y con las provincias y municipios con los que, eventualmente, se convinieran acciones comunes.

Las responsabilidades operativas estarían a cargo de las unidades sectoriales encargadas de la compra, producción, almacenamiento y distribución de los bienes y servicios de cada uno de los ministerios, de la Presidencia de la Nación y de los demás entes enumerados en el Art. 1º del proyecto, y de proveer de los insumos necesarios para el sistema de información y la evaluación a cargo de la unidad central.

Destacan aquí tres de las mayores innovaciones del sistema, la primera referida al sistema de información (Art. 5º) que prestará asistencia para la elaboración de políticas, la programación y la gestión de las contrataciones.

Dado que cada ente debe elaborar un programa anual de contrataciones (Art. 6º), en segundo lugar, este sistema permitirá eliminar el descontrol respecto a su oportunidad y conveniencia, ya que esta programación deberá respetar su plan de acción, presupuesto y recursos financieros asignados.

Estos dos pasos permiten, a su vez, arribar a un tercero: realizar una evaluación del sistema a nivel global y, de desarrollarse el sistema de información, de particularizarla luego por organismo, jurisdicción, región, para un momento o periodo determinado o por sectores o productos, etc.

Otro de los servicios destacados a cumplir por esta organización será el de llevar un registro central de proveedores y contratistas del Estado que, en caso de arribarse a un acuerdo con las provincias, podría tener alcance nacional y habilitar para contratar con cualquier jurisdicción. Este registro centralizado aliviará y agilizará notablemente la tarea de evaluación de ofertas al contar con una fuente segura para la consulta sobre la capacidad jurídica, técnica y económica de los oferentes, como así también sobre sus antecedentes en la ejecución de contratos anteriores, sanciones, etc.

Es de importancia en este aspecto de la organización relacionada al sistema de información, la existencia de un catálogo producto de la normalización, identificación y catalogación, para los bienes de uso común. Ya se ha señalado el grado de desarrollo que ha adquirido en nuestro país el proceso de normalización de materiales y control de calidad a través de las normas y sellos de certificación de calidad del IRAM que la normativa en vigencia ha adoptado y que, seguramente, la reglamentación de la proyectada ratificará.

I.5. CONSIDERACIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS ACERCA DEL SISTEMA VIGENTE Y DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS.

Las consideraciones económicas y financieras acerca de los regímenes de contrataciones del Estado se encuentran estrechamente con el contexto económico en el que se desenvuelven. Así, un sistema que contenga una normativa adecuada, con un grado aceptable de eficiencia en las tareas de planificación y programación de las contrataciones y asociado a una eficaz tarea de control, difícilmente pueda funcionar adecuadamente en un contexto hiperinflacionario; aunque, como es obvio, que un sistema con las características mencionadas funcionará mejor en ese contexto que aquel sistema de contrataciones que no posea esos atributos.

Las estabilidad de precios que existe actualmente en la economía del país conjuntamente con la disciplina fiscal que se traduce en la elaboración y aprobación oportuna de los presupuestos, la elaboración de metas trimestrales de caja, etc., han recreado un espacio en el cual los sistemas de contrataciones puedan desarrollarse sin "interferencias" y por lo tanto es factible visualizar las virtudes y limitaciones que cada uno de los regímenes presenta.

En este sentido, cuanto mejor sea la normativa que rija el sistema, mejor el sistema de información referido a precios, condiciones del mercado, proveedores y mercancías, y exista más eficiencia en las tareas de gestión y control de las contrataciones, mejor serán los precios y/o calidades de los bienes y servicios que contrate el Estado.

Es decir que con los mismos recursos podría disponer de bienes y servicios de calidad y/o cantidad superior, o bien, para disponer de los mismos bienes y servicios debería pagar por ellos una cifra menor.

Ahora bien, en las modificaciones propuestas al régimen de contrataciones, y que se han mencionado con anterioridad, existen un conjunto de elementos que llevan a pensar que el sistema ganaría en eficiencia y por lo tanto el Estado tendería a ahorrar recursos o a maximizar la utilidad de éstos.

La organización de la oficina nacional del sistema y oficinas periféricas y del Registro Central de Proveedores y Contratistas del Estado, conjuntamente con la elaboración de un catálogo de bienes de uso común y un sistema de información de precios le permitirán al Estado que haga valer su enorme capacidad de compra e imponer condiciones más ventajosas para la contratación.

Por otra parte, la elaboración de una metodología para la programación de adquisiciones de bienes y servicios, conjuntamente con los manuales de procedimientos de contratación, la normativa específica que regule a la contratación de obra pública, los servicios de consultoría y de computación y la normativa genérica a todos los contratos de

las entidades públicas referida a las modalidades, gestión, autorización, montos, etc., permitirán disminuir el periodo promedio que media entre la necesidad de contar con un bien o servicio y su disposición efectiva y por lo tanto mejora la eficiencia del gasto público. Además, debido a la mejor programación, se tienden a evitar las compras de "urgencia" que implican generalmente mayores precios, calidades inferiores, condiciones desventajosas o una combinación de ellas.

Por último, los manuales para la recepción de bienes de uso y de consumo y los de administración de almacenes, permitirán establecer claramente las responsabilidades de los agentes, las formalidades documentales que deben existir y los controles cuali-cuantitativos a realizar, traduciéndose en menores gastos financieros, menores pérdidas, etc.

1.5.1. EL REGIMEN DE CONTRATACIONES Y LAS LEYES DE COMPRE

Asociadas generalmente a las normas referidas a las contrataciones del Estado aparecen las legislaciones de "compre", sea este nacional o provincial, según se trate de la jurisdicción del régimen de compras.

Estos mecanismos consisten básicamente en la preferencia de los productos ofrecidos por aquellos proveedores que se encuentren adscriptos a sistema del "compre" y que se refleja en la aceptación de estos bienes o servicios a pesar de contar con un determinado porcentaje de precio superior.

Este mecanismo de protección por parte de los gobiernos opera ineficientemente en la economía que se trate dada la creación de ventajas competitivas artificiales y no justificadas desde el punto de vista económico, ya que si se quiere proteger la industria o comercio de un determinado país, región o provincia, existen innumerables herramientas mucho más aptas, eficaces y menos onerosas para cumplir con tal fin.

Ademas, por estos mecanismos de compre se crean complejos procesos para la obtención de la habilitación para el "compre", asimilándose a la obtención prebendas y que en muchas ocasiones desembocan en actos de corrupción debido a la discrecionalidad de los funcionarios de turno para otorgar la habilitación.

Los efectos económicos que éstos regímenes traen aparejados determinan un nivel de gasto público más alto y cuya eficiencia marginal es igual a cero, desviando recursos que podrían estar orientados a la salud, educación, justicia, etc.. Por otra parte, acarrea una distorsión de las señales de precios que el Estado envía a la economía y que resulta discriminatoria según el tipo de proveedor de que se trate. Por último genera la aparición de una renta adicional para los proveedores que se encuentran adheridos al régimen del "compre" ya que se añaden del mayor precio que paga el Estado produciéndose una traslación de ingresos desde el sector público hacia quienes poseen el registro.

II.1.ANALISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA PROPUESTO PARA LA NACION, CON EL VIGENTE EN LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CORDOBA Y MENDOZA

II.1.1. CUADRO COMPARATIVO DE LAS LEYES DE CONTABILIDAD DE LA NACION Y DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CORDOBA Y MENDOZA CON EL PROYECTO DE LEY DEL EJECUTIVO NACIONAL (MENSAJE 2392)

Comparación de los Sistemas de Contratación previstos en las Leyes de Contabilidad de la Nación, de las Provincias de Mendoza, Buenos Aires y Córdoba, y el Proyecto de Ley de Contrataciones remitido por el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso Nacional.

Para la realización del presente trabajo se ha tenido como base de la comparación el ordenamiento por temas que adopta en su articulado el Proyecto de Ley de Contrataciones remitido por el Poder Ejecutivo al H.C.N., sirviendo este como punto de partida de las comparaciones con los Sistemas de Contrataciones previstos en las leyes de Contabilidad vigentes en la Nación y las Provincias de Mendoza, Buenos Aires y Córdoba.

AMBITO DE APLICACION

PROYECTO DE LEY

Art. 1º: Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que estará conformado por: **a)** La administración central y los organismos descentralizados del poder ejecutivo, comprendiendo en estos últimos las instituciones de seguridad social; **b)** Las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta, cuando su objeto sea la prestación de servicios públicos, y todas aquellas otras organizaciones empresarias en las que el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en las decisiones societarias cuyo objeto sea la prestación de servicios públicos; aún cuando sus estatutos sociales, cartas orgánicas o leyes especiales establezcan otros regímenes de contratación; **c)** El Poder Legislativo; **d)** El Poder Judicial. El Poder Legislativo y el Poder Judicial dictarán sus propias reglamentaciones con ajuste a la presente; **e)** La Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires.

CONTRATOS INCLUIDOS

PROYECTO DE LEY

Art. 2º: El sistema que se establece se aplicará a las contrataciones de suministros, servicios, obras, concesiones de obra, y servicios públicos, consultoría, compraventa de bienes y locaciones que realicen las entidades mencionada en el artículo 1º, con excepción de la relación de empleo público.

LEY DE CONTABILIDAD DE LA NACION.

Art. 55: Toda compra o venta por cuenta de la administración, así como todo contrato sobre locaciones, arrendamientos, trabajos o suministros, se hará, por regla general, previa licitación pública.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA

PROYECTO DE LEY

Art. 3º: Las contrataciones deberán ajustarse a los siguientes principios: **a)** Publicidad y transparencia; **b)** Igualdad; **c)** Promoción de la competencia; **d)** Eficiencia y eficacia en el proceso de contratación; **e)** Razonabilidad de la contratación para cumplir con el interés público comprometido; **f)** Responsabilidad de los agentes y funcionarios que autoricen, dirijan o ejecuten las contrataciones.

LEY DE CONTABILIDAD DE CORDOBA

Art. 108: En todas las contrataciones se deberá asegurar la igualdad de los posibles oferentes, la defensa de los intereses colectivos y de la hacienda pública provincial, así como la responsabilidad inherente a los funcionarios que intervengan. El Poder Ejecutivo reglamentará los requisitos y procedimientos básicos que deben regir las contrataciones por cuenta del Estado, debiendo provocar la tipificación de artículos y que los pliegos de condiciones favorezcan la

conurrencia de la mayor cantidad posible de oferentes, compatible con la celeridad, seriedad y garantía del acto de selección. Asimismo deberá reglamentar un régimen de permutas ajustado a los preceptos de esta ley.

ORGANIZACION DEL SISTEMA

PROYECTO DE LEY

Art. 4º: El Sistema de contrataciones del Estado Nacional se organizará en función de los criterios de centralización normativa y descentralización operativa, a este fin se constituirán: a) Una unidad central de contrataciones en jurisdicción del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos que tendrá por objeto proponer las políticas, los procedimientos y las normas que sean necesarias para su implementación y centralizar la información, el control y la evaluación del sistema en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, coordinando su accionar con los organismos correspondientes de los Poderes legislativo y Judicial; b) Las unidades operativas que funcionarán en las áreas de administración de cada uno de los ministerios, de la Presidencia de la Nación y de los poderes o de las entidades comprendidas en el artículo 1º, las que estarán a cargo de la gestión de contrataciones.

SISTEMAS DE INFORMACION

PROYECTO DE LEY

Art. 5º: La unidad central implementará un sistema que tendrá por objeto proporcionar información para la elaboración de las políticas, la programación y la gestión de las contrataciones referente a las condiciones y modalidades de cada prestación, siendo responsable de su diseño y elaboración. Las entidades comprendidas en el artículo 1º deberán remitir la información que les sea requerida, y solicitar la que necesiten a la unidad central.

PROGRAMA DE CONTRATACIONES

PROYECTO DE LEY

Art. 6º: Cada entidad mencionada en el artículo 1º elaborará, a través de su respectiva unidad operativa, su programa anual de contrataciones sobre las bases incluidas en su plan de acción y presupuesto y de los recursos financieros que le sean asignados.

AGENTES RESPONSABLES

PROYECTO DE LEY

Art. 7º: La unidad operativa estará a cargo de la gestión de contratación, pero la adjudicación será resuelta por la autoridad competente de cada entidad, que además supervisará su actuación y será responsable de ello. El titular de cada unidad operativa será responsable del cumplimiento de los principios del artículo 3º y las normas y procedimientos establecidos y adoptará los recaudos que aseguren su eficiencia con la tecnología adecuada a las necesidades y al menor costo posible. Podrá requerir el asesoramiento de especialistas en temas de costos, auditoría, ingeniería, legales y demás conocimientos específicos que estimen necesarios para el eficiente cumplimiento de sus funciones a fin de asegurar la eficacia, mérito u oportunidad de las mismas.

LEY DE CONTABILIDAD DE LA NACION

Art. 58: El Poder Ejecutivo, determinará, para cada jurisdicción, los funcionarios facultados para autorizar las contrataciones, cualquiera sea su monto y para aprobar la que no excedan de cien mil pesos.

Art. 59: Los Poderes Legislativo y Judicial y el Tribunal de Cuentas designarán los funcionarios que, reglamentariamente, autorizarán y aprobarán las contrataciones a realizar en sus respectivas jurisdicciones.

LEY DE CONTABILIDAD DE MENDOZA

Art. 36: Las autoridades superiores de los Poderes de la provincia determinarán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones en sus respectivas jurisdicciones.

LEY DE CONTABILIDAD DE BUENOS AIRES

Art. 33: Las autoridades superiores de los Poderes del Estado determinarán los funcionarios que autorizarán y aprobarán las contrataciones en sus respectivas sedes.

FORMAS DE SELECCION

PROYECTO DE LEY

Art. 8º: La selección del contratista podrá realizarse mediante los siguientes sistemas: a) Licitación; b) Concurso; c) Contratación directa; d) Concurso de proyectos integrales; e) Remate o subasta.

LEY DE CONTABILIDAD DE CORDOBA

Art. 106: Toda contratación del estado provincial se efectuará mediante el procedimiento de selección, la que podrá realizarse mediante los mecanismos de Licitación, Concurso de Precios, Contratación Directa y Subasta.

LICITACION Y CONCURSO

PROYECTO DE LEY

Art. 9º: La licitación y el concurso pueden ser: públicos y privados, de etapa única o múltiple, con o sin negociación, con o sin iniciativa privada, de proyectos integrales, nacionales o internacionales. a) La selección es pública cuándo pueden presentar ofertas todos los interesados sin otro requisito, en su caso, que el de la inscripción en registros generales. Todas las contrataciones se realizarán previa licitación pública, salvo que la ley establezca un proyecto diferente; b) La selección es privada cuándo solo tienen derecho a presentar ofertas aquellos que han sido invitados al efecto, sin perjuicio del derecho del solicitante de considerar ofertas presentadas por quienes no lo fueron; c) La selección es múltiple cuándo separa en dos (2) o más etapas la comparación de las calidades de los oferentes y de las ofertas, mediante preselecciones sucesiva. En todos los casos en que se utilice esta variante, la recepción de los sobres respectivos será simultánea y solo se procederá a abrir el correspondiente a la oferta económica de aquellas propuestas

que hubieren sido preclasificadas; d) La selección es con negociación, cuándo incluye una etapa posterior a la apertura de las ofertas en la cuál el licitante negocia simultáneamente con los oferentes que preselecciona para adecuar sus ofertas a las necesidades públicas. en el caso de tratarse de una selección de etapa múltiple, la entidad contratante queda facultada para gestionar con el oferente mejor colocado, o con los oferentes, en el caso de ofertas similares, modificaciones de condiciones que -sin alterar el principio de igualdad entre los participantes- reporten beneficios para la entidad contratante. Las gestiones mencionadas deberán fundamentarse por escrito y se agregarán al expediente; e) La selección es con iniciativa privada cuándo otorga al oferente autor de la iniciativa el derecho de participar, juntamente con el titular de la oferta mas conveniente por el licitante, en una etapa de mejora de ofertas; f) La selección es internacional cuándo la convocatoria admite oferentes del exterior.

REQUISITOS

PROYECTO DE LEY

Art. 10: El acto que decide llamar a contratación y establece el mecanismo de selección a utilizar debe ser motivado. La contratación directa por libre selección, por selección privada, por selección con negociación y por selección con iniciativa privada tendrá carácter excepcional y solo podrá ser autorizada en los casos previstos en la ley, en las condiciones que disponga la reglamentación.

CONCURSO PUBLICO

PROYECTO DE LEY

Art. 11: Deben ser celebrados previo concurso público aquellos contratos en los que el criterio de selección recaiga primordialmente en factores no económicos, salvo que la ley admita su contratación directa.

CONTRATACION DIRECTA - MODALIDADES

PROYECTO DE LEY

Art. 12: La contratación directa podrá adoptar las siguientes modalidades: a) Contratación directa con precio testigo; b) Libre elección por contratación directa.

PRECIO TESTIGO

PROYECTO DE LEY

Art. 13: Cuándo el precio de un bien o servicio normalizado o de características homogéneas se manifieste con una tendencia estadística, a juicio de la autoridad de aplicación. En estos casos podrá seleccionarse libremente al contratista siempre que el precio convenido no supere el cinco por ciento (5%) del precio testigo y hasta el monto que determine la reglamentación.

LIBRE ELECCION

PROYECTO DE LEY

Art. 14: No obstante lo establecido en los artículos anteriores podrá contratarse en forma directa por libre negociación en los siguientes casos: **a)** Cuando la operación no exceda la suma que al respecto fije la reglamentación; **b)** Cuando circunstancias debidamente acreditada, a juicio del ministro del ramo o de la máxima autoridad en su caso, exijan que la operación contractual deba mantenerse en secreto. Tal facultad será indelegable; **c)** Cuando probadas razones de urgencia originadas en circunstancias imprevisibles plenamente justificadas, impidan la realización de una licitación en tiempo oportuno; **d)** Cuando para la adjudicación resulte determinante la capacidad artística o técnico-científicas, la destreza o habilidad o la experiencia particular del co-contratante o cuando este se halle amparado por patente o privilegio o los conocimientos para la ejecución sean poseídos por una sola persona o entidad y no existan sustitutos convenientes. La sola existencia de una marca de fábrica no constituirá causal de exclusividad, salvo que técnicamente se demostre que no hay sustitutos convenientes; **e)** Cuando sea menester efectuar adquisiciones en países extranjeros, siempre que en ellos no sea posible realizar licitación, o los contratos deban celebrarse y ejecutarse en países extranjeros; **f)** Cuando se deba efectuar la compra de semovientes por selección y semillas, plantas y estacas que sean ejemplares únicos y sobresalientes; **g)** Cuando una licitación o concurso hayan resultado desiertos por ausencia de ofertas ajustadas al pliego respectivo, siempre que rijan para la contratación directa exactamente las mismas condiciones y cláusulas que las exigidas en la licitación o concurso desiertos; **h)** Los contratos celebrados entre entidades del Estado, sean nacionales, provinciales o municipales; **i)** Las reparaciones de maquinarias, equipos o motores cuyo desarme, traslado o examen previo resultare oneroso en caso de adoptarse otro procedimiento de contratación. Esta excepción no podrá aplicarse a las reparaciones comunes de mantenimiento; **j)** La adquisición de bienes que se realicen en subasta o remate públicos, en cuyo caso el precio máximo a pagar será el que surja de la autorización respectiva, que deberá ponderar la tasación previamente efectuada y el análisis de los valores de mercado u otros elementos de juicio que establezca la reglamentación; **k)** La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades impostergables de orden social, siempre que se efectúe directamente a los usuarios o consumidores; **l)** La adquisición de material bibliográfico del país o del exterior, cuando se efectúe directamente a editoriales; **m)** Cuando exista notoria escasez en el mercado local de los bienes a adquirir, circunstancia que deberá ser probada en cada caso, por las oficinas técnicas competentes. En cada caso de los previstos en el presente artículo deberá dejarse constancia fundada en el expediente de las circunstancias justificadas del procedimiento adoptado.

LEY DE CONTABILIDAD DE LA NACION

Art. 56: No obstante lo establecido en el artículo anterior, podrá contratarse: 1º)... 2º) ... 3º) Directamente, en los siguientes casos: **a)** Cuando la operación no exceda de cinco mil pesos; **b)** La compra de inmuebles en remate público, previa fijación del precio máximo a abonarse en la operación; **c)** Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del gobierno se mantengan secretas; **d)** Por razones de urgencia, en que a mérito de circunstancias imprevistas no pueda esperarse la licitación; **e)** Cuando una licitación haya resultado desierta o no se hubiesen presentado en la misma ofertas admisibles; **f)** Las obras científicas, técnicas o artísticas cuya ejecución debe confiarse a empresas, personas o artistas especializados; **g)** La adquisición de bienes cuya fabricación o venta sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo posea una determinada persona o entidad, siempre y cuando no hubieran sustitutos convenientes; **h)** Las compras y locaciones que sea menester efectuar en países extranjeros siempre que no sea posible realizar en ellos la licitación; **i)** Las contrataciones entre reparticiones

públicas o en las que tenga participación el Estado; j) Cuándo exista notoria escasez en el mercado local de los bienes a adquirir, circunstancia que deberá ser acreditada en cada caso, por las oficinas técnicas competentes; k) La venta de productos perecederos y de elementos destinados al fomento de las actividades económicas del país o para satisfacer necesidades de orden sanitario; l) La reparación de vehículos y motores; m) la compra de semovientes por selección.

LEY DE CONTABILIDAD DE MENDOZA

Art. 29: No obstante lo expresado en el Artículo 28 podrá contratarse: a) ... b) *Directamente:* 1) Cuándo el monto de la operación no exceda el valor equivalente a 5.000 Unidades Tributarias, vigente al momento de decisión de la compra. 2) Entre reparticiones oficiales o mixtas, nacionales, municipales o pertenecientes a gobiernos extranjeros. 3) Cuándo la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas admisibles. 4) Cuándo medien probadas razones de urgencia, o caso fortuito, no previsibles, o no sea posible la licitación o el remate público, o su realización resienta seriamente el servicio. 5) Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello y no hubiere sustituto conveniente. 6) Las compras y locaciones que sean menester efectuar a países extranjeros, siempre que no sea posible en ellos realizar la licitación. 7) La compra de bienes en remate público, El Poder Ejecutivo determinará en qué caso y condiciones, debiendo establecerse previamente el precio máximo a abonarse en la operación. 8) Cuándo hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir. 9) Para adquirir, ejecutar, conservar o restaurar obras artísticas, científicas o técnicas que deban confiarse a empresas, personas o artistas especializados. 10) Las reparaciones de maquinarias, equipos, rodados o motores cuyo desarme, traslado o examen resulte oneroso en caso de llamarse a licitación. Esta excepción no rige para las reparaciones comunes de mantenimiento, periódicas, normales o previsibles. 11) Cuándo las circunstancias exigen que las operaciones del gobierno se mantengan secretas. 12) La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios. 13) Cuándo se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial. 14) El canje o venta de animales exóticos o de exposición. 15) La publicidad oficial. 16) La adquisición de diarios y revistas. Para las adquisiciones y suministros de las áreas del Ministerio de Bienestar Social, los montos topes serán del cincuenta por ciento (50%) mas de los establecidos por esta ley.

LEY DE CONTABILIDAD DE BUENOS AIRES

Art. 26: (Decreto-Ley 9178/78). No obstante lo expresado en el artículo 25, podrá contratarse: 1) ... 2) ... 3) *Directamente:* a) Entre reparticiones oficiales, nacionales, provinciales o municipales y entidades en las que dichos Estados tengan participación mayoritaria; b) Cuándo la licitación pública o privada o el remate resultaren desiertos o no se presentaren ofertas válidas admisibles o convenientes; c) Por razones de urgencia o emergencia imprevisible; d) Para adquirir bienes cuya fabricación o propiedad sea exclusiva de quienes tengan privilegio para ello o que solo posea una determinada persona o entidad y no hubiera sustituto conveniente; e) Las compras y locaciones que sean menester efectuar en países extranjeros, siempre que no sea posible en ellos la licitación; f) La compra de bienes por selección o en remate público previa fijación del monto máximo a abonarse en la operación; g) Cuándo hubiere notoria escasez de los elementos a adquirir; h) La contratación de artistas, técnicos y/o sus obras; i) La reparación de motores, máquinas y aparatos en general y la compra de vehículos, automotores y su

reparación; j) Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas; k) La publicidad oficial; l) La compra, locación y arrendamiento de inmuebles; m) Los servicios periódicos de limpieza y mantenimiento de bienes para el funcionamiento de las dependencias del Estado o para prestaciones a cargo del mismo; n) Cuando los bienes o servicios sean limitados a experimentación, investigación o simple ensayo; o) Trabajos de impresión y la compra y venta de publicaciones; p) La venta de productos perecederos y los destinados al fomento económico o a la satisfacción de necesidades sanitarias, siempre que la misma se efectúe directamente a los usuarios; q) Cuando se trate de bienes cuyos precios sean determinados por el Estado Nacional o Provincial; r) La venta de bienes en condición de rezago a instituciones de bien público reconocidas por organismos dependientes del Estado Provincial o Municipal; s) Cuando se entreguen bienes muebles o semovientes a cuenta de precio.

LEY DE CONTABILIDAD DE CORDOBA

Art. 110: Las operaciones de Contratación Directa serán las siguientes: 1) Cuando el monto de la operación no exceda el límite fijado por la Ley Normativa de Ejecución del Presupuesto. 2) Cuando en casos de urgencia manifiesta y por necesidades imperiosas no pueda esperarse, sin perjuicio de la función o servicios públicos, un llamado a Licitación o Concurso de Precios. 3) Cuando hubiera sido declarada desierta una Licitación o no se hubiesen presentado ofertas admisibles o convenientes, circunstancia esta que deberá acreditarse. Tales Contrataciones deberán ajustarse a las mismas bases y condiciones. 4) Cuando no hubiesen proponentes o las propuestas fuesen inaceptables después de un segundo llamado a Concurso de Precios. 5) Cuando las obras, cosas o servicios sean de tal naturaleza que solo puedan confiarse a artistas o especialistas. 6) Cuando se trate de productos fabricados o servicios prestados o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad o que tengan un poseedor único, siempre que no hubiera sustitutos convenientes. 7) Por los materiales y productos que en razón de su naturaleza o especialidad de su empleo deban ser adquiridos en los lugares de producción y de los productos mismos. 8) Cuando se trate de contrataciones con Entes del Estado Provincial, Nacional, Municipal y Sociedades de Economía Mixta en las que tenga participación mayoritaria el Estado Nacional, los Estados Provinciales o Municipales, Entidades de Bien Públicos y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, con personería jurídica en las condiciones mas convenientes. 9) Cuando se trate de adquirir bienes o contratar servicios cuyo precio es oficial. En igual de calidad y condiciones, tendrán prioridad aquellos que suministren las dependencias oficiales. 10) Cuando las circunstancias exijan que las operaciones del Gobierno se mantengan secretas. 11) Cuando medien razones de seguridad. 12) Las compras en Subasta previa fijación del precio máximo a abonarse en la operación. 13) La publicidad oficial. 14) La compra de periódicos, diarios, revistas y publicaciones en general. 15) La compra de libros, cuando se realice directamente a la empresa editora o distribuidora de los mismos. 16) Las compras y locaciones que sea menester efectuar en países extranjeros. 17) Cuando exista notoria escasez en el mercado de los bienes a adquirir. 18) En caso de prórroga de contratos de locación de bienes o servicios, de acuerdo al sistema de reajuste que se establezca en la reglamentación. 19) La compra de semovientes que por su naturaleza, características o destino, no permita otro modo de selección. 20) La adquisición de artículos de alimentación perecederos o servicios de racionamiento, siempre que no sea posible la realización por otros métodos de selección, con entregas parciales o periódicas de esos artículos o servicios y hasta el monto que fije la Ley Normativa de Ejecución del Presupuesto. 21) La venta de productos

perecederos y de alimentos destinados al fomento de actividades económicas del país o para satisfacer necesidades de orden sanitario, cuándo se haga directamente a los consumidores o usuarios. 22) La venta de bienes consumibles o de elementos en condición de rezago o en desuso, en este último caso según lo disponga la reglamentación, y siempre que su valor no supere en fijado por la Ley Normativa de Ejecución del Presupuesto. 23) La venta de elementos que provengan de la producción que realizan organismos con carácter de empresa, o que persigan fines de experimentación, fomento, readaptación, educación o terapia. 24) La venta de bienes de rezago o en desuso, en este último caso según lo disponga la reglamentación, a instituciones de bien público con personería jurídica. 25) La venta de publicaciones que edite el Estado Provincial. 26) La reparación de vehículos, motores, máquinas y equipos, cuándo resulte indispensable el desarme total o parcial de la unidad para determinar las reparaciones necesarias. 27) La reparación de inmuebles, cuándo la causa que produzco el deterioro no esté a la vista impidiendo determinar a priori la magnitud de los trabajos a realizar. 28) Cuándo se trate de insumos o repuestos originales de fábrica, servicios de mantenimiento de vehículos, máquinas o equipos, podrá contratarse directamente con el fabricante o su distribuidor oficial o con la firma proveedora del bien, como así también las reparaciones de vehículos cuándo se realicen en concesionarios oficiales. Salvo los casos previstos en los incisos 1, 14, 23 y 25 las situaciones, circunstancias o causales serán debidamente acreditadas o fundadas en cada caso, por la autoridad que los invoque.

SELECCION PRIVADA

PROYECTO DE LEY

Art. 15: Podrá recurrirse a la selección privada cuándo el monto de la contratación no exceda el que al respecto fije la reglamentación para la licitación pública; en los supuestos de los artículos 12 y 13; o cuándo, sin llegar al extremo de exclusividad o especialización previsto por el inciso d) del artículo 14, la idoneidad necesaria para cumplir el contrato esté claramente limitada a las empresas o personas que se invite a participar.

LEY DE CONTABILIDAD DE LA NACION

Art. 56: No obstante lo establecido en el artículo anterior, podrá contratarse: 1º) En licitación privada, cuándo el valor estimado para la operación no exceda de cien mil pesos.

LEY DE CONTABILIDAD DE MENDOZA

Art. 29: No obstante lo expresado en el Artículo 28 podrá contratarse: a) *Por licitación privada*, cuándo el monto estimado de la operación no exceda el valor equivalente a 25.000 Unidades Tributarias establecidas por la Dirección General de Rentas, vigente al momento de la decisión de la compra. ...

Art. 34: En las licitaciones privadas se invitará a empresas del ramo con una anticipación mínima de cinco días a la fecha de apertura.

LEY DE CONTABILIDAD DE BUENOS AIRES

Art. 26: (Decreto-Ley 9178/78). No obstante lo expresado en el artículo 25, podrá contratarse: 1) Por licitación privada cuándo el monto de la operación no exceda de A\$1.80.000.000. 2) Hasta A\$18.000.000 según lo reglamente el Poder Ejecutivo.

Art. 31: (Decreto-Ley 8789/77). En las licitaciones privadas se invitará a empresas del ramo con una anticipación mínima de tres (3) días a la fecha de la apertura. Este plazo podrá ser reducido, dadas las mismas condiciones establecidas en el artículo 30, hasta veinticuatro horas antes de la apertura.

SELECCION POR NEGOCIACION

PROYECTO DE LEY

Art. 16: Podrá recurrirse a la selección por negociación en los supuestos de los artículos 13, 14, 15 y además, cuándo la complejidad de las prestaciones a cargo del contratante haga impracticable su configuración detallada y definitiva en los pliegos de condiciones, de todo lo cuál deberá dejarse fundada constancia.

SELECCION POR INICIATIVA PRIVADA

PROYECTO DE LEY

Art. 17: La presentación de iniciativas por parte de personas físicas o jurídicas para la ejecución de obras o prestación de servicios deberá contener los lineamientos generales que permitan su comprensión e identificación, así como la aptitud suficiente para demostrar la viabilidad jurídica, técnica y económica de la propuesta, conforme a los requerimientos que en tal sentido establezca la reglamentación. Establecido el procedimiento de selección, conforme las disposiciones de esta ley y su reglamentación, de existir una oferta más conveniente de la presentada por quién tuvo la iniciativa, según acto administrativo debidamente fundado, se convocará al autos de la oferta mas conveniente y al autor de la iniciativa a que mejoren sus respectivas propuestas. En los casos en que, recibidas dichas mejoras, las ofertas fueran de conveniencia equivalente, será preferida la del autor de la iniciativa.

REMATE O PUBLICA SUBASTA

PROYECTO DE LEY

Art. 18: Los entes comprendidos en el artículo 1º podrán recurrir al remate en los casos de los artículos 13 y 14 y además para la venta de bienes de su propiedad, en las condiciones que determine la reglamentación.

LEY DE CONTABILIDAD DE MENDOZA

Art. 35: Cuándo la autoridad competente disponga el remate de bienes de cualquier naturaleza, deberá fijarse previamente un valor base que deberá ser estimado con intervención de las reparticiones técnicas que sean competentes.

LEY DE CONTABILIDAD DE BUENOS AIRES

Art. 32: Cuándo se disponga el remate de bienes de cualquier naturaleza, deberá fijarse previamente un valor base que deberá ser estimado con intervención de las reparticiones técnicas que sean competentes.

CONCURSO DE PROYECTOS INTEGRALES

PROYECTO DE LEY

Art. 19: Podrán contratarse bajo la modalidad de concurso de proyectos integrales cuándo la entidad no hubiera determinado detalladamente las especificaciones del objeto del contrato o se tratare de una iniciativa de particulares y aquella desease obtener propuestas sobre los diversos medios posibles para satisfacer sus necesidades. En tales casos, la entidad contratante deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Efectuar la selección del contratista o proveedor en función tanto de la propuesta técnica de la propuesta como de su precio; b) Consignar los factores que habrán de considerarse para la evaluación de las propuestas, y determinar el coeficiente de ponderación relativa que se asignará a cada factor y la manera de aplicarlos.

CONTRATOS CONSOLIDADOS ABIERTOS FUNCIONALES

PROYECTO DE LEY

Art. 20: Las contrataciones consolidadas abiertas funcionales se realizarán en aquellos casos en que dos (2) o más entidades de las mencionadas en el artículo 1º requieran la misma prestación y se le asigne a una de ellas la gestión del proceso de contratación hasta la adjudicación, con el fin de obtener mejores condiciones que las que obtendrían las entidades individuales.

CONTRATACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS

PROYECTO DE LEY

Art. 21: La contratación de profesionales y técnicos, nacionales o extranjeros, bajo el régimen de contrato de locación de servicios, podrá efectuarse en forma directa, en las condiciones que disponga la reglamentación, cuándo su notoria competencia y experiencia estuviera fehacientemente comprobada y fundada en forma expresa.

VIGENCIA

PROYECTO DE LEY

Art. 22: La presente ley entrará en vigencia a partir de los noventa (90) días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará a los procedimientos de selección que se inicien a partir de dicha entrada en vigencia.

DEROGACIONES

PROYECTO DE LEY

Art. 23: Deroganse los artículos 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62 y 63 de la ley de contabilidad (decreto-ley 23.354/56), el artículo 9º de la ley 13.064, el artículo 4º de la ley 17.520, modificada por la ley 23.696, el artículo 12 de la ley 22.460, sus reglamentaciones y toda otra norma que se oponga a la presente, sin perjuicio de su continuada aplicación a los procedimientos de selección en curso a esa fecha.

REGLAMENTACION

PROYECTO DE LEY

Art. 24: Es competencia del Poder Ejecutivo Nacional reglamentar los requisitos básicos que deben regir las contrataciones del Estado Nacional, preservando los

principios enunciados en el artículo 3º y las bases organizativas del sistema establecidas en el artículo 4º de esta ley. El Poder Legislativo y el Poder Judicial dictarán sus propios reglamentos dentro del marco establecido por la presente.

LEY DE CONTABILIDAD DE LA NACION

Art. 61: El Poder Ejecutivo, con intervención del Tribunal de Cuentas, reglamentará los requisitos básicos que deben regir las contrataciones por cuenta del Estado, debiendo cuidar especialmente que ellas se hagan por grupos de artículos de un mismo ramo y que los pliegos de condiciones favorezcan la concurrencia de la mayor cantidad de postores.

LEY DE CONTABILIDAD DE MENDOZA

Art. 31: El Poder Ejecutivo, las Cámaras Legislativas y el Poder Judicial, en su caso determinarán las condiciones generales y particulares para las licitaciones, aplicandose supletoriamente las que establece el Poder Ejecutivo de modo que favorezcan la concurrencia de la mayor cantidad posible de oferentes, el tratamiento igualitario de los mismos, el cotejo de ofertas, las condiciones y formas de previsión y pago y demás condiciones análogas. En las adquisiciones de bienes muebles podrá incluirse la entrega de elementos usados similares a cuenta de precios, siempre que esta circunstancia se encuentre expresamente establecida en las condiciones de la licitación. En estos casos se admitirán propuestas de compras de dichos elementos usados, independientemente de la provisión de los nuevos, siempre en el mismo acto licitatorio.

Art. 37: El Poder Ejecutivo, las H. Cámaras Legislativas y el Poder Judicial, en su caso reglamentarán las demás condiciones que deberán reunir las contrataciones, fijando el número de empresas a invitar, uso de medios publicitarios, depósito de garantía, inscripción en registro, requisitos para las pre-adjudicaciones y adjudicaciones definitivas, muestras, normas de tipificación y otras que se consideren convenientes, aplicandose supletoriamente las que establezca el Poder Ejecutivo.

LEY DE CONTABILIDAD DE BUENOS AIRES

Art. 34: El Poder Ejecutivo reglamentará las demás condiciones que deberán reunir las contrataciones, fijando número de empresas a invitar, uso de medios publicitarios, depósitos de garantía, inscripción en registros, requisitos para las preadjudicaciones y adjudicaciones definitivas, muestras, normas de tipificación y otras que se consideren convenientes.

Art. 25: De forma.

II.1.2. COMPARACION DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO NACIONAL (DECRETO N° 5720/72) CON EL REGLAMENTO DE LAS CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (DECRETO 3300/72).

(Decreto 5270/72 T.O. con las modificaciones introducidas por los Decretos N° 204/88, 825/88, 826/88 y 828/88).

(Decreto 3300/72 T.O. con las modificaciones introducidas por los Decretos N° 4497/74, 790/76, 5028/76, 624/77, 1842/77, 2501/78, 204/83 y 3378/84).

En la presente comparación, se ha tenido como base el Decreto N° 5270/72 de la Nación, al cual se le efectúan como comentarios, las notas sobresalientes del Decreto 3300/72 de la Provincia de Buenos Aires.

Reglamentación artículo 61 de la Ley de Contabilidad de la Nación.

PROVEEDORES

Inc. 1°: La Contaduría General de la Nación tendrá a su cargo el Padrón de Proveedores y el Registro de Sancionados. "El Padrón de Proveedores se integrará con todas las personas físicas o jurídicas que contraten con el Estado. Dentro de los cinco (5) días posteriores a la apertura de las ofertas, o de la contratación en los supuestos previstos por el artículo 56 inciso 3, apartado d,e,f,g,j y l de la Ley, y antes de la preadjudicación los organismos contratantes deberán comunicar a la Contaduría General de la Nación la nómina de oferentes o contratantes con los datos adicionales que se requerirán para la inclusión de estos en el padrón y la atribución de un número único de Proveedor. Este número deberá ser comunicado al oferente o contratista por el organismo licitante, mediante su publicación en cartelera y deberá ser denunciado por aquellos en las posteriores contrataciones en que ofertaren. El Registro de Sanciones se integrará con todas las personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas por la Contaduría General de la Nación.

El art. 86 del Decreto N° 3300/72, también prevé que el Registro de Proveedores, estará a cargo de la contaduría General de la Nación.

Inc. 2°: Para contratar con el Estado se requerirá: a) Tener capacidad para obligarse. b) Dar cumplimiento con lo establecido por el Código de Comercio en los artículos 33 y 34. c) Tener casa de comercio o fábrica establecida en el país, con autorización o patente que habilite para comerciar en los renglones en que opera, o ser productor, importador o representante autorizado de firma establecida en el extranjero. d) Proporcionar los informe o referencias que le fueran requeridos.

El art. 88 del Decreto N° 3300/72, fija en principio los mismos requisitos a los que se le agregan por ejemplo: estar inscripto en la Caja de Previsión, en impuestos tasas y contribuciones y fijar domicilio en la Provincia de Bs. As. La diferencia está dada que en el Decreto Nacional los prevén como requisito para contratar con el Estado y en el Decreto Provincial los establece para estar inscripto en el Registro de Proveedores.

Inc. 3°: Podrán contratar sin los requisitos establecidos en los apartados b) y c) del inciso 2°: a) Los comerciantes que comunmente no cumplieren los requisitos establecidos por los artículos 33 y 44 del Código de Comercio por las características de su comercio; b) los artesanos, obreros, artistas y profesionales; c) Las sociedades en formación durante el plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha de inscripción; d) Propietarios circunstanciales de una mercadería cuando se

d) Propietarios circunstanciales de una mercadería cuando se trate de personas que no se dedican habitualmente a la venta de la misma; e) Postores en pública subasta y oferentes en ventas de bienes del Estado; f) Locadores y locatarios de inmuebles; g) Firms extranjeras sin sucursales ni representación en el país, cuando se presenten en licitaciones internacionales; h) Suscripciones de diarios, revistas y publicaciones especializadas.

El art. 95 del Decreto N° 3300/72, preve similar excepción.

Inc. 4º: No podrán contratar con el Estado: a) Las sociedades e individualmente sus socios y/o miembros del Directorio, según el caso, que estén sancionados con suspensión o inhabilitación de acuerdo con lo establecido en el inc. 18); b) Las sociedades en las cuales los alcanzados por el apartado a) posean participación por cualquier título, siempre que esta les otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social, en tanto aquellos hayan sido sancionados por hechos dolosos; c) Las personas físicas o jurídicas que posean participación por cualquier título, para formar la voluntad social de una sociedad sancionada, siempre que aquella haya sido determinante del hecho doloso que diera lugar a la sanción; d) Los cónyuges de los sancionados y las sociedades en las que aquellos posean la participación prevista en los apartados anteriores; e) Los sucesores de firmas que estén sancionadas, cuando existan suficientes indicios que por su gravedad, precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a los antecesores; f) Los agentes y funcionarios del Estado, en los términos de la ley 22.140 y las firmas integradas total o parcialmente por los mismos; g) Las personas físicas o jurídicas en estado de concurso, quiebra o liquidación, las que se encuentren en estado de concurso preventivo podrán formular ofertas, salvo decisión judicial en contrario; h) Los inhabilitados; i) Los condenados en causa criminal. Sin embargo, la autoridad competente del organismo contratante podrá considerar la oferta si, en virtud de la naturaleza de los hechos, las circunstancias del caso o el tiempo transcurrido, juzgare que la condena no es incompatible con la condición de proveedor del Estado; j) Los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales, declarados por autoridad competente, según corresponda, así como también deudores morosos del fisco.

El art. 89 del Decreto N° 3300/72, es menos restrictivo que el Decreto Nacional, pero hace referencia a la inscripción en el Registro de Proveedores.

SANCIONES

Inc. 8º: Sin perjuicio de las correspondientes penalidades contractuales se aplicarán a los oferentes o adjudicatarios, según corresponda, las sanciones de apercibimiento, suspensión o inhabilitación en los supuestos de incumplimiento, desestimiento de ofertas o adjudicación o infracciones de cualquier naturaleza contractual.

Inc. 9º: Será sancionado con apercibimiento, por única vez, quién incurriere en hechos sancionables, si por su entidad así correspondiere. Será sancionado con suspensión: a) De hasta TRES (3) hechos culposos, cuando por su gravedad así se justifique y siempre que no correspondiere el supuesto del párrafo anterior. b) De mas de TRES (3) meses y hasta un año el que, cumplida la sanción del apartado a), incurriere en nuevos hechos culposos sancionables dentro del periodo de TRES (3) años. c) De DOS (2) y hasta OCHO (8) años el que cometiere cualquiera de los hechos sancionables en forma dolosa.

Inc. 11: Podrá ser inhabilitado para contratar, mediante resolución fundada: a) El que con posterioridad a la aplicación de la sanción contemplada en el inc. 9º, apartado c) cometiere un nuevo hecho doloso dentro del lapso de TRES (3) años posteriores computados desde la comisión del hecho. b) El que incurriera en el supuesto del inc. 9º) apartado b) y por su gravedad así se justifique. La Contaduría General de la Nación podrá rehabilitar para contratar con el Estado al proveedor sancionado con inhabilitación una vez transcurrido el plazo de OCHO (8) años desde la fecha de su inhabilitación. Ello deberá disponerse mediante resolución fundada meritando debidamente si las circunstancias del caso o la forma de operar de la firma han variado en forma favorable, de modo tal que resulte conveniente y aconsejable su rehabilitación.

Inc. 12: No se podrán imponer sanciones después de transcurrido el plazo de TRES (3) años desde la fecha en que se cometió la infracción.

Inc. 13: A los efectos de la aplicación de las sanciones que correspondieren, los organismos licitantes comunicarán a la Contaduría General de la Nación, por cualquier medio fehaciente, las conductas que pudieren dar lugar a la aplicación de sanciones y las resoluciones firmes que confirmaren tales especies, previstas por los respectivos contratos y en este reglamento, dentro de los TREINTA (30) días de su dictado, remitiendo todos los antecedentes del caso, si fuera necesario.

Inc. 14: En las actuaciones iniciadas por consecuencia de la denuncia de infracciones, incumplimientos, desestimiento de ofertas o la adjudicación, la Contaduría General de la Nación, antes de resolver, dará vista a los interesados por el plazo de DIEZ (10) días, quienes dentro de los DIEZ (10) días subsiguientes podrán formular descargos o aclaraciones y ofrecer prueba que haga a su derecho. Si como consecuencia de ello hubiere necesidad de obtener alguna prueba luego de producida esta, se dará vista a los interesados y a la dependencia que intervino en la contratación, por el plazo de DIEZ (10) días con lo que se tendrá por concluido el procedimiento para la resolución definitiva. Será de aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, sus normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

Inc. 15: Los apercibimientos, suspensiones e inhabilitaciones aplicadas por la Contaduría General de la Nación alcanzarán a las sociedades respectivas e individualmente a sus socios, y solo tendrán efecto con relación a los actos posteriores a la fecha en que se hubiere dispuesto la sanción.

Inc. 16: Cuando las sanciones fueren aplicadas a sociedades anónimas o en comandita por acciones, alcanzarán a éstas a los miembros de sus directorios y a los socios comanditados, respectivamente, y a quien posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social.

Inc. 17: Las sanciones de apercibimiento, suspensión e inhabilitación, serán aplicadas por la Contaduría General de la Nación y recurribles ante el Ministerio de Economía en las formas previstas por la Ley de Procedimientos Administrativos y sus normas complementarias, modificatorias y reglamentarias.

Inc. 18: Cuando los suspendidos e inhabilitados por hechos dolosos, formen parte al propio tiempo de otras sociedades, las sanciones alcanzarán a estas, solo cuando aquellos posean participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social.

Inc. 27: Las sanciones que se apliquen a los Proveedores del Estado, serán comunicadas por la Contaduría General de la Nación a la Dirección del Registro Oficial para su publicación.

En cuanto a las Sanciones, el Decreto N° 3300/72, es menos explícito que el Decreto Nacional y las sanciones aplicables si bien son de similar entidad en razón de los hechos, es mas severo en cuanto a la aplicación de sanciones.

Inc. 28: Independientemente del Registro de Proveedores del Estado, la Contaduría General de la Nación tendrá a su cargo el Registro de Organismos del Estado, incluidas las Empresas cualquiera sea su naturaleza jurídica, que puedan efectuar provisiones o prestar servicios a organismos del Estado. A fin de figurar en el mismo, los organismos mencionados deberán formular la pertinente comunicación a la Contaduría General de la Nación.

CONTRATACION - REQUISITOS

Inc. 30: Las respectivas oficinas cumplirán, como mínimo, al iniciar toda contratación, los requisitos siguientes: a) Formular el pedido por escrito; b) Establecer, respecto del objeto motivo de la contratación, si los elementos deben ser nuevos, usados o reacondicionados, cantidad, especie y calidad, de conformidad con la terminología calificativa usual en el comercio, ajustadas cuando corresponda a las normas I.R.A.M., Farmacopea Nacional Argentina, etc. c) Dar fundamento a las razones que justifiquen la solicitud de bienes o servicios que difieran de las comunes o que signifiquen restringir la concurrencia de oferentes; d) Estimar su coste de acuerdo con las cotizaciones de plaza; e) Suministrar todo otro antecedente que se estime de interés para la mejor apreciación de lo solicitado.

El art. 5° del Decreto N° 3300/72, preve similares requisitos, pero solo para la Licitación o Remate Público y la Licitación privada.

Inc. 31: Las autoridades superiores de cada organismo establecerán, con la debida antelación, sus respectivos planes de compra y determinarán los plazos dentro de los cuales deberán elevarse los pedidos de contrataciones habituales, los cuales se formularán generalmente una sola vez para cada ejercicio o en períodos mayores o menores, según la naturaleza de la prestación, normas de comercialización o situaciones de la plaza.

El art. 7° del Decreto N° 3300/72, tiene similar contenido, pero solo para la Licitación o Remate Público y la Licitación privada.

Inc. 32: Las respectivas oficinas de contratación de cada organismo, ordenarán las compras, de acuerdo a los pedidos que le hayan sido formulados por las distintas dependencias usuarias de los bienes que se solicitan, siguiendo las siguientes normas básicas: a) Agruparán los pedidos por renglones afines o de un mismo rubro comercial; b) Prepararán los pliegos de bases para cada licitación determinando las características, especificaciones y calidades mínimas de los elementos que se soliciten, evitando la transcripción detallada de textos extraídos de folletos, catálogos o presupuestos informativo. La comprobación de que en un llamado a licitación se hubieran formulado especificaciones o incluido cláusulas, cuyo cumplimiento solo sea factible para determinada persona o entidad, de manera que el llamado esté dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a su anulación inmediata en el estado de trámite en que se encuentre y la iniciación, también inmediata, del sumario pertinente para determinar los responsables; c) En

los casos en que un renglón abarque un número importante de unidades y con el objeto de aumentar la competencia con la presentación de comerciantes menores o nuevas industrias, al confeccionar la nómina de artículos a licitar, podrán fraccionarse dichos renglones en un número menor de unidades hasta completar el total pedido, pudiendo los oferentes hacer ofertas por parciales o totales; d) Se presumirá que existe desdoblamiento del que serán responsables los funcionarios que hubieren acordado las respectivas autorizaciones cuando en un lapso de TRES (3) meses se efectúen contrataciones de elementos pertenecientes a un mismo agrupamiento, sin que previamente se documenten las razones que los justifiquen. Exceptuándose de lo determinado en el párrafo anterior las adquisiciones que se refieran a productos perecederos; e) No se podrá incluir en un mismo renglón, elementos o equipos que no configuren una unidad funcional indivisible, por razones de funcionamiento, adaptación, ensamble, estilo y/o características similares que exija la inclusión; f) Cuando se justifique por la naturaleza excepcional de la contratación, a juicio de la autoridad superior del organismo licitante, se podrá incluir como excepción en las cláusulas particulares, los requisitos especiales que ineludiblemente deberán acreditar los oferentes, a los fines de la consideración de sus ofertas. Estas Excepciones se podrán referir a: capacidad técnica, garantías de funcionamiento y service de elementos que así lo requieran o exigencias similares, pero no podrán usarse para selección artificiosa de oferentes.

El Decreto N° 3300/72, no preve este artículo.

GARANTIA

Inc. 33: Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y los adjudicatarios, deberán constituir las siguientes garantías: I- De la Oferta: a) CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la oferta; b) DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la oferta en los casos de permisos o concesiones y ventas por el Estado. En el caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto. II- De la Adjudicación: QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total de la adjudicación. III- Contragarantía: Por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto en aquellas contrataciones en que los planes de financiamiento prevén tales entregas. Cuando la cotización se haga en moneda extranjera, el importe de la garantía se calculará al tipo de cambio vendedor vigente al cierre de la semana anterior a la de la constitución de la garantía.

El art. 22 del Decreto N° 3300/72, preve que las ofertas serán afianzadas mediante pagarés sin variar el porcentaje en razón del tipo de contrato. El art. 24 del Decreto N° 3300/72, preve que previo a la adjudicación se remplace la garantía sin variar el porcentaje de la misma.

Inc. 34: Las garantías a que se refiere el inc. 33) deberán constituirse en alguna o algunas de estas formas a opción del oferente o adjudicatario: a) En efectivo, mediante depósito en el Banco de la Nación Argentina, acompañado la boleta pertinente. En aquellos lugares donde no exista sucursal de dicha institución o por razones de urgencia o excepción se depositará en la dependencia licitante; b) En cheque certificado, contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice la licitación o giro postal o bancario. El organismo depositará el cheque dentro de los plazos que rijan para estas operaciones. c) En títulos, aforados a su valor nominal de la deuda pública nacional, bonos del tesoro emitidos por el Estado Nacional o cualquier otro valor similar nacional, provincial o municipal, siempre que estos dos últimos se coticen oficialmente en la Bolsa de comercio de Buenos Aires. En caso de ejecución de los valores a que se refiere este apartado, se

formulará cargo por los gastos que ello ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidaran bajo la par. El eventual excedente quedará sujeto a las disposiciones de los inc. 39) y 40).

El art. 22 del Decreto N° 3300/72, preve como forma de garantía el pagaré a la vista.

Inc. 36: La garantía de adjudicación será cubierta por el adjudicatario a la orden del organismo licitante de acuerdo a lo dispuesto en el inc. 116). (8 días)

El art. 24 del Decreto N° 3300/72, establece un plazo de diez días para cubrir la garantía de adjudicación.

Inc. 37: No será necesario constituir la garantía del CINCO POR CIENTO (5%) de la adjudicación, en los siguientes casos: a) Cuando el monto del contrato no supere el límite establecido en el inc. 3), apartado a), del art. 56 de la Ley de Contabilidad; b) en las contrataciones de artistas o profesionales; c) En las contrataciones de avisos publicitarios, adquisición de publicaciones e inmuebles y locación de los mismos cuando el estado actúe como locatario; d) En las contrataciones entre organismos del estado, incluidas las Empresas cualquiera sea su naturaleza jurídica. No obstante lo previsto en los apartados anteriores, todos los oferentes y adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a simple requerimiento de la dependencia licitante, en caso de resolución de la administración que así lo disponga, si que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago.

El art. 22 del Decreto N° 3300/72, preve el monto a partir del cuál las ofertas deben ser afianzadas (a), pero no menciona el Decreto Provincial otras excepciones a la constitución de garantías, salvo en el art. 28 referido a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores, que reúnan una serie de requisitos que podrán solicitar a la Contaduría General que se los exima hasta un monto máximo previsto.

Inc. 38: Las excepciones previstas en el primer párrafo del inc. anterior así como el uso del pagaré autorizado por el apartado g) del Inc. 34), no rigen para las firmas no inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado, ni tampoco para las ventas, permisos o concesiones aun para firmas inscriptas, salvo que estas estén eximidas de presentar garantías o afianzar las mismas de acuerdo a los límites y condiciones que establece el inc. 41). En consecuencia, en estos casos se deben constituir garantías de ofertas y de adjudicación, pero solo en las formas previstas en los apartados a), b), c), d), e) y f) de dicho inc. 34).

No previsto por el Decreto N° 3300/72.

Inc. 39: Serán devueltas de oficio: a) Las garantías de ofertas, en su caso, a los oferentes que no resulten adjudicatarios, un vez decidida la adjudicación; b) Las garantías de adjudicación, una vez cumplido el contrato. A solicitud de los interesados y salvo el caso de los pagarés sin afianzar, deberá procederse a la devolución parcial de las garantías de adjudicación en proporción a lo ya cumplido, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para cubrir los valores resultantes. En los casos en que luego de notificado fehacientemente, los oferentes o adjudicatarios, no retiracen las garantías, podrán reclamar su devolución dentro del plazo de UN (1) año a contar de la fecha de la notificación. La falta de presentación dentro del plazo señalado por parte del titular del derecho, implicará la renuncia tácita del mismo a favor del Estado y será aceptada por la autoridad competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituye la garantía. Cuando la garantía haya sido constituida mediante pagaré, este se destruirá al término de dicho plazo.

El art. 27 del Decreto N° 3300/72, preve la devolución de la garantía del apartado a).

Inc. 40: El Estado no abonará intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en tanto que lo que devengaren los mismos, pertenecerán a sus depositantes.

No previsto en el Decreto N° 3300/72.

Inc. 41: Las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores del Estado con una antigüedad en el mismo de TRES (3) años, que hubieran cumplido satisfactoriamente los compromisos contraídos con organismos estatales, podrán solicitar a la Contaduría General de la Nación que se les exima de la obligación de presentar la garantía de adjudicación hasta un máximo de PESOS QUINCE MIL (\$15.000) y de afianzar los pagarés de adjudicación hasta la suma de PESOS TREINTA MIL (\$30.000). Estos importes no podrán representar un porcentaje mayor del CINCO (5) y DIEZ (10) por ciento respectivamente del capital social de la firma beneficiaria. La recurrente, en la solicitud deberá indicar los organismos de los cuales sea o haya sido proveedor, referencias bancarias y cualquiera otra información que se le requiera. La Contaduría General de la Nación procederá al estudio de los antecedentes presentados, teniendo en cuenta, además, todos aquellos que obren en su poder relacionados con la actuación anterior del solicitante y, si de ello resultare aconsejable, otorgará la franquicia. A tal efecto, se otorgará un certificado que servirá para cada caso particular, esto es, sin acumulación y que tendrá validez durante todo el término del contrato, aún cuando la exención venciere antes.

El art. 28 del Decreto N° 3300/72, hace igual previsión variando solamente los montos, plazo y porcentajes.

Inc. 42: La exención caducará: a) A los CINCO (5) años de la fecha de su otorgamiento, pudiendo ser renovada por periodos iguales mediante resolución de la Contaduría General de la Nación; b) Automáticamente, en el caso de baja o de aplicarse a la firma la sanción de suspensión del Registro de Proveedores del Estado, sin que ello afecte los contratos en curso de cumplimiento.

El art. 28 del Decreto N° 3300/72, preve un plazo de tres (3) años para la caducidad de la franquicia o exención; efectuando la misma previsión del apartado b).

Inc. 43: El otorgamiento y la cancelación de exención se publicará en el Boletín Oficial.

No previsto en el Decreto N° 3300/72.

CLAUSULAS GENERALES Y PARTICULARES

Inc. 44: Las contrataciones se regirán por las disposiciones de este reglamento y por las contenidas en las respectivas cláusulas particulares. Los organismos licitantes establecerán las cláusulas particulares que correspondan respecto de la presentación que se ha de contratar, y no podrán incluir en ellas requisitos que se aparten de lo determinado en este reglamento.

El art. 13 del Decreto N° 3300/72, preve que las licitaciones públicas y privadas se regirán por las cláusulas generales de los pliegos tipos que aprueba el Poder Ejecutivo.

Inc. 45: En las cláusulas particulares deberán indicarse los requisitos esenciales de la contratación y en especial: Apertura. a) Lugar, día y hora donde se presentarán y abrirán las ofertas; b) Plazo de mantenimiento de las mismas, cuando sea distinto al determinado en el Inc. 71), circunstancia esta que deberá estar justificada y debidamente fundamentada en las actuaciones respectivas; Exhibición de pre-adjudicaciones y término para impugnar. c) Lugar en que serán exhibidos los anuncios de la pre-adjudicación a que se refiere el inc. 78) y término para formular impugnaciones de acuerdo con el primer párrafo del inc. 79); Lugar y forma de entrega y recepción. d) Lugar y forma de entrega y recepción de lo adjudicado, estableciéndose preferentemente que la entrega se efectuará en el lugar de destino, corriendo el flete y descarga por cuenta del adjudicatario. En aquellos casos en que las circunstancias lo hagan necesario o conveniente podrá preverse: 1º) Que la estiba en los depósitos que indique la dependencia licitante de los elementos adjudicados sea por cuenta del oferente; 2º) La aceptación de ofertas sobre vagón u otros medios de transporte; 3º) Flete y descarga por cuenta del organismo licitante; 4º) si los envases serán devueltos y en que plazos; 5º) En caso de que los elementos requieran instalación si esta deberá ser hecha por el oferente; En caso de que en las cláusulas particulares no se fije el lugar de entrega, se entenderá que es en el lugar de apertura de la licitación. e) El plazo máximo de entrega, será fijado por el oferente y no será superior a QUINCE (15) días, salvo casos de excepción que por la índole del elemento a proveer, fabricación y/o importación, cantidad, etc. pueda demandar un plazo mayor, excepción esta que el oferente deberá justificar en su propuesta. Cuando por razones de necesidad o excepcionales, la dependencia necesite fijarlo, circunstancia que deberá fundarse en las actuaciones respectivas, se evitará siempre que la fijación de este plazo pueda significar una restricción artificial de las ofertas. Cuando en lugar de plazos de entrega, circunstancia que también deberá fundarse en las actuaciones respectivas, el organismo licitante tenga que establecer fechas de entrega, paralelamente deberá establecer el plazo o la fecha en que librará la correspondiente orden de compra, entendiendo que si esta no se entrega en la fecha estipulada, los días de demora en su entrega se adicionarán como prórroga automática a la fecha de entrega previamente establecida, actuando a la inversa en el supuesto de que la entrega de la orden se adelantara a la fecha prevista para hacerlo. En el caso de que la dependencia licitante no fijara la fecha de entrega de la orden el oferente podrá establecer los plazos o las fechas hasta la cual aceptara entendiéndose que si no se la fija en este caso aceptará la orden en el momento que la reciba. De no fijarse plazos de entrega por ninguna de las partes, se entenderá que el cumplimiento debe operarse en un plazo de QUINCE (15) días. Conformidad previa para la entrega. f) Si será requerida la conformidad de la dependencia licitante antes de la entrega; Entregas parciales. g) Lapsos en los que podrán recabarse entregas parciales y cantidades que han de suministrar en cada una de ellas, cuando se requieran entregas sujetas al pedido de la dependencia licitante. Plazo apertura crédito documentario. h) Plazo máximo en que la dependencia licitante efectuará la apertura del respectivo crédito documentario, si se previera esta forma de pago para las contrataciones de elementos a importar. De no fijarlo la dependencia licitante podrá hacerlo el oferente y no será inferior a SESENTA (60) días. Plazo de recepción definitiva. i) Plazo de recepción definitiva si este fuera distinto al establecido en el inc. 102). La modificación del plazo de recepción definitiva deberá estar debidamente justificada y responderá a exigencias que pueda crear la naturaleza de los elementos a recepcionar, análisis especiales, grandes cantidades, u otras circunstancias similares. Aprobación previa de muestras. j) Si se deberá someter para su aprobación y previamente a la entrega una muestra de lo adjudicado. En estos casos el oferente y el organismo licitante, respectivamente, fijarán los plazos de presentación y de aprobación de la misma. Viveres frescos. k)

En la adquisición de víveres frescos podrá preverse, en las cláusulas particulares, que el precio de la provisión será el que para cada uno de los artículos fije como precio máximo o medio según proceda, la entidad competente en los centros de abasto minorista que establezca. Para la adjudicación, será considerada la oferta que establezca mayor porcentaje de descuento sobre los precios fijados, conforme a lo indicado en este apartado. Valor de los pliegos. l) Valor asignado a los pliegos de bases y especificaciones. Será determinado por el organismo licitante entre los CINCO DECIMOS POR MIL (0,50/00) y el CINCO POR MIL (50/00) del costo estimado de la contratación. ll) Se solicitará la acreditación de la capacidad técnica, económica y financiera, evitando la restricción artificial de las ofertas. m) Se solicitará la presentación juntamente con la oferta, de una declaración jurada acerca del cumplimiento de los requisitos enumerados en el inc. 2), o del encuadramiento en alguna de las excepciones del inc. 3), según corresponda.

El art. 14 del Decreto N° 3300/72, efectúa una previsión similar en cuanto a los requisitos que debe contener el pliego de bases y condiciones para las licitaciones, aunque la misma no es tan minuciosa y detallada.

Inc. 46: Las especificaciones correspondientes a los elementos licitados deberán consignar en forma precisa e inconfundible: a) Las características y calidades mínimas esenciales de la prestación, cualquiera fuera su naturaleza, de acuerdo con las normas fijadas en el inc. 30) apartado b) y el inc. 32); b) Las tolerancias serán, en principio, las máximas compatibles con las necesidades funcionales y la naturaleza y características del artículo licitado, que sean habituales en razón de la modalidad de comercialización o fabricación del mismo. La no aceptación de tolerancia cuando razones científicas o técnicas, que deberán constar en las actuaciones que den origen al pedido de precios, excluyan su posibilidad, deberán constar en las cláusulas particulares.

El apartado A) b) del art. 14 del Decreto N° 3300/72, efectúa similar previsión.

Inc. 47: Sin perjuicio de que en todos los casos se de cumplimiento a lo establecido en el Inc. 46), cuándo resulte dificultoso la determinación de ciertas características del elemento requerido, estas podrán remitirse a las de una muestra patrón en poder del organismo licitante. Cuando no sea posible exhibir una muestra patrón, cláusulas particulares la presentación de muestras por parte del oferente. Siendo las especificaciones de la oferta lo fundamental y las muestras lo accesorio, la no presentación de estas no será causal de rechazo de la oferta cuando esta se ajuste a lo dispuesto en los requisitos. El oferente podrá, para mejor ilustrar su propuesta, presentar muestras pero no podrá reemplazar con estas las especificaciones.

El apartado A) c) del art. 14 del Decreto N° 3300/72, hace la previsión anterior sin mayores detalles.

Inc. 48: Las especificaciones, en principio, no deberán requerir marca determinada. Cuando se aleguen razones científicas o técnicas o existan en el mercado bienes cuya notoria y probada calidad aconsejen su adquisición, y estas circunstancias se encuentren debidamente fundadas, podrá solicitarse marca o marcas determinadas. Aún cuando se requiera marca determinada podrán ofertarse productos de otras marcas. En estos casos los oferentes deberán aportar al organismo licitante los elementos de juicio necesarios que permitan a este comprobar que los bienes ofertados reúnen las características requeridas. Para ello el organismo licitante podrá exigir a los oferentes la acreditación de la calidad suministrada mediante certificados expedidos por el Instituto Nacional de

Tecnología Industrial (INTI) u otras entidades competentes de carácter público o privado. Para la reparación de aparatos, máquinas o motores, podrán solicitarse repuestos denominados legítimos.

El apartado A) b) del art. 14 del Decreto N° 3300/72, efectúa igual previsión aunque menos puntual.

Inc. 50: Las propuestas serán redactadas en idioma nacional, en formularios del oferente, por duplicado o en la cantidad de copias adicionales que establezcan las cláusulas particulares, presentadas en sobre oficial suministrado por el organismo licitante o sobre común, o con membrete del oferente, indistintamente, o en caja o paquete si son voluminosas, perfectamente cerrados. Se admitirán hasta el día y hora fijados para la apertura del acto y contendrán en su cubierta, la indicación de la contratación a que corresponde, el día y hora de apertura. Las ofertas deberán estar firmadas, en todas sus fojas, por el oferente o su representante autorizado. Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberán ser debidamente salvadas por el oferente. A cada oferta deberá acompañarse la constancia de la constitución de la garantía y/o presentación de muestras cuando correspondiere.

El art. 15 del Decreto N° 3300/72, establece que las propuestas serán presentadas en duplicado y en sobre cerrado en el que se consignará, organismo contratante y domicilio, Número de expediente y número de licitación, Fecha y Hora de apertura. El art. 16 del Decreto N° 3300/72, establece que deberá acompañarse el documento de garantía pertinente, descripción del objeto o servicio ofertado (catálogo si correspondiere), recibo de muestra si hubiere sido presentada.

Inc. 51: La presentación de las ofertas significa de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a licitación, salvo expresa manifestación en contrario, por lo que no es necesario la devolución de los pliegos de bases ni de especificaciones, firmados o no.

No previsto en el Decreto N° 3300/72.

Inc. 52: El oferente podrá formular oferta por todo, o parte de lo solicitado. Podrá también hacerlo por parte del renglón, pero cuando solo así lo admitan las cláusulas particulares. Como alternativa, después de haber cotizado por renglón, puede ofrecer por el total de los efectos ya propuestos o grupo de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra. A efectos de determinar la oferta más conveniente, corresponderá efectuar la comparación de la propuesta global o parcial por grupo de renglones, con la suma de menores precios totales a adjudicar, en la misma relación de renglones. Los descuentos que se ofrezcan por adjudicación total o parcial deberán tenerse en cuenta a los efectos de la comparación de precios.

El art. 19 del Decreto N° 3300/72, concede la misma opción.

Inc. 53: La oferta especificará: a) el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad solicitada o su equivalente, si esto no se prohíbe expresamente en las cláusulas particulares, determinando en la moneda cotización, y el total general de la propuesta, en base a la alternativa de mayor valor, expresado en letras y números; b) La cotización por cantidades netas y libres de envases y gastos de embalaje, salvo que las cláusulas particulares previeran lo contrario. Si el producto tuviera envase especial y el mismo debiera devolverse, el flete y acarreo respectivo, ida y vuelta, desde el mismo lugar y por los mismos medios de envío a emplear para la devolución, serán por cuenta del oferente, que

en estos casos deberá especificar separadamente del producto, el valor de cada envase y además estipular el plazo de devolución de los mismos, si el organismo licitante no lo hubiere establecido en las cláusulas particulares. De no producirse la devolución de envases en los plazos establecidos por una u otra parte, el oferente podrá facturarlos e iniciar el trámite de cobro de los mismos a los precios consignados en la oferta, quedando este trámite sin efecto, si la devolución se produce en el interin; c) El origen del producto cotizado, si no se indicara, se entiende en principio, que es de producción nacional.

El art. 18 del Decreto N° 3300/72, preve las mismas condiciones que debe reunir la oferta.

Inc. 54: Las cotizaciones por productos a importar deberán hacerse bajo las siguientes condiciones: a) En Moneda extranjera, cuando así se hubiera previsto en las cláusulas particulares, correspondiente al país de origen del artículo ofrecido u otra usual en el comercio de importación; b) De no estipularse lo contrario las cotizaciones se establecerán en condiciones F.O.B. Puerto de Origen; c) Se ajustarán siempre a las disposiciones que sobre la materia dispongan las autoridades competentes, Banco Central, Ministerio de Haciendas y Finanzas, etc.; d) Los plazos de entrega, salvo convención en contrario, se entenderán cumplidos cuando el organismo licitante reciba la documentación de embarque; e) Cuando la mercadería adquirida deba ser entregada y se trate de elementos a instalar y recibir en funcionamiento, el oferente deberá consignar por separado los plazos para dar cumplimiento a esta última obligación. a tal efecto, los mismos comenzarán a computarse a partir de la comunicación, por el organismo comprador, del arribo de la mercadería a su destino definitivo. En tal caso, se estipulará la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento de esta obligación, equivalente al UNO POR CIENTO (1%) semanal o fracción mayor de TRES (3) días. Dicha mora se producirá en forma automática y sin intimación previa alguna; f) Se respetarán las normas del comercio internacional, en especial las habituales establecidas y aceptadas por nuestro país con el de origen de la mercadería ofrecida; g) Los seguros, en aquellos casos especiales que se establezca condición C.I.F. para las cotizaciones, deberán siempre cotizarse en moneda nacional y separadamente del valor de la mercadería; h) La gestión a efectos de obtener la liberación de recargos, derechos aduaneros y otros gravámenes correspondientes al elemento adjudicado, estará a cargo del organismo licitante y deberá ser tramitada y obtenida siempre antes de la apertura de la Carta de Crédito, entendiéndose que si aquel no pudiera ser liberado por disposiciones legales en vigencia, el contrato podrá ser rescindido sin responsabilidad alguna, salvo las que determina el inc. 88).

El art. 20 del Decreto N° 3300/72, da la opción en estos casos de cotizar en moneda extranjera, condicionando a que la contratación se efectúe con la cláusula FOB, y en la cotización además se consignarán todos los impuestos y gastos que correspondan.

Inc. 55: No se podrá estipular el pago en oro o valor oro, ni en moneda distinta a la cotizada. Las cotizaciones en moneda nacional no podrán referirse, en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor.

El Decreto N° 3300/72 no preve tal prohibición.

Inc. 56: Los precios correspondientes a la adjudicación, por norma, serán invariables. No obstante, cuando causas extraordinarias e imprevisibles modifiquen la economía del contrato, se podrá, por acuerdo de partes: a) Reconocer variaciones de costo en la medida que dichas causas incidan en los mismos; b) Dar por rescindido el contrato sin penalidades.

El art. 21 del Decreto N° 3300/72, preve la existencia de precios variables y precios ajustables.

Inc. 57: El reconocimiento previsto en el inciso anterior sólo podrá computar las variaciones de precios producidas en el período comprendida entre la fecha de adjudicación de la licitación y la fijada para el cumplimiento del contrato, sin considerar las prórrogas acordadas en virtud de lo autorizado por el inc. 91).

El art. 21 del Decreto N° 3300/72, preve los ajustes desde el día o mes de apertura de las ofertas y el día o mes de recepción definitiva.

Inc. 58: En los casos a que se refiere el inc. 47), las muestras de ofertas podrán ser presentadas hasta el momento fijado para la iniciación del acto de apertura en el lugar que indiquen las cláusulas particulares.

El art. 29 del Decreto N° 3300/72, las muestras deberán ser presentadas con la propuesta.

Inc. 59: En caso de que las muestras no fueran agregadas a la propuesta, se indicará en parte visible, la contratación a la cual corresponden y el día y hora establecidos para la apertura de las ofertas a las que se encuentran destinadas. Se otorgará recibo de las muestras entregadas personalmente, dejándose constancia en las actuaciones, de las que reciban por otros conductos, debiéndose ser todas obligatoriamente precintadas por el organismo licitante en el momento de su recepción, a efectos de asegurar que no se identifique la oferta cuando deban ser sometidas a análisis o, en su caso, utilizarse como testigo.

El art. 29, 2º párrafo, del Decreto N° 3300/72, también preve este caso en forma similar.

Inc. 60: Las muestras que se acompañen a las ofertas quedarán a disposición de los proponentes para su retiro hasta UN (1) mes después de la comunicación efectuada por el organismo licitante de que las mismas están a disposición del oferente, pasando a ser propiedad del Estado, sin cargo, las que no fueran retiradas en este plazo. La dependencia tenedora de las muestras queda facultada para resolver sobre su uso, venta o destrucción, si en éste último caso, no tuvieran aplicación alguna. Cuando las muestras sean "sin cargo" el oferente lo hará constar en la documentación respectiva. Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados quedarán en poder de la dependencia para comprobación de los que fueran provistos por los adjudicatarios. Una vez cumplido el contrato, quedará a disposición del adjudicatario por el plazo de UN (1) mes a contar de la última conformidad de recepción. De no procederse a su retiro dentro de dicho plazo, se observará el procedimiento señalado en el párrafo anterior.

Los arts. 31 y 32 del Decreto N° 3300/72, establecen el tratamiento que ha de darse a las muestras tanto en el caso de las ofertas rechazadas como de las adjudicadas, pero no fijan un plazo para el retiro de las muestras.

Inc. 61: Los proponentes deberán mantener las ofertas por el término de TREINTA (30) días a contar de la fecha del acto de apertura, o el que se fije en las cláusulas particulares, previa justificación de las actualizaciones respectivas si fuera mayor que aquel. Si el oferente no mantiene el plazo estipulado de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior será facultad del organismo licitante considerar o

no las ofertas así formuladas según convenga a los intereses del Estado. Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, éstas caducarán automáticamente. Si en la licitación respectiva se formulara impugnación, de acuerdo con lo previsto en el inc. 79), el plazo de mantenimiento de las propuestas presentadas en la misma se considerará automáticamente ampliado en CINCO (5) días. Vencido el lapso fijado sin haberse efectuado adjudicación, la oferta caducará, salvo que se obtuviere prórroga del proponente.

El Decreto N° 3300/72 no establece término durante el cual deban mantenerse las propuestas, debiendo fijarse los mismos en las cláusulas particulares (art. 14, A) d).

Inc. 62: La apertura de las ofertas recibidas deberá realizarse en el lugar, día y hora determinados, en presencia de los funcionarios designados por la dependencia, mediante acto formal, al cual tendrán derecho a concurrir todos aquellos que desearan presenciarse. A partir de la hora fijada para la apertura del acto, no podrán, bajo ningún concepto, recibirse otras ofertas aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado. En las actas que deberán labrarse constarán: a) Número de orden asignado a cada oferta; b) Monto de la oferta; c) Nombre del oferente y el o los números de inscripción en el Padrón de Proveedores, o en los Registros de Proveedores si correspondiere; d) Monto y forma de la garantía, cuándo correspondiere su presentación; e) Todas las observaciones e impugnaciones que se formulen. El acta firmada por los funcionarios y por los asistentes que desearan hacerlo. Ninguna oferta podrá ser desestimada en el acto de apertura. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por autoridad competente antes de ser desestimadas. Los originales de las propuestas serán rubricados por el funcionario que presida el acto y exhibidos a los asistentes. Los oferentes podrán, asimismo, solicitar a su costa copia de las ofertas presentadas, recurriéndose al fotocopiado o procedimiento equivalente, utilizándose a tal efecto los duplicados de las ofertas.

Los arts. 33, 35 y 36 del Decreto N° 3300/72, contienen similares previsiones.

Inc. 63: Si el día señalado para la apertura de las propuestas no fuera laborable, el acto tendrá lugar en día laborable siguiente, a la misma hora.

El Decreto N° 3300/72, no contiene tal previsión.

Inc. 64: Serán objeto de desestimación las ofertas: a) Que no estén firmadas por el oferente; b) Que estén escritas con lápiz común; c) Que carecieran de la garantía exigida, cuándo así correspondiera; d) Que sean formuladas por firmas no habilitadas por el Registro de Proveedores del Estado, con las excepciones del Inc. 49; e) Que, en lugar de especificaciones en su oferta se remitan a muestras presentadas o no para el acto licitatorio en reemplazo de las especificaciones; f) Que tengan raspaduras o enmiendas en las partes fundamentales: "precio", "cantidades", "plazo de mantenimiento", "plazo de entrega" o alguna otra que haga a la esencia del contrato, y no hayan sido debidamente salvadas.

El art. 38 del Decreto N° 3300/72, contiene similares causales de desestimación.

Inc. 65: No serán desestimadas las ofertas que contengan defectos de forma, como ser falta de precio unitario o de totalización de las propuestas u otras imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las demás presentadas. Tampoco serán desestimadas las ofertas que exijan un monto mínimo de adjudicación en concordancia con lo dispuesto en el Inc. 84) apartado e).

El Decreto N° 3300/72 no preve estos supuestos.

Inc. 66: No serán rechazadas las ofertas cuando, por error la garantía presentada fuera de un importe inferior a la que corresponda, no superando el error un VEINTE (20) por ciento del importe correcto. Cuando al hacer el estudio de las ofertas se observara el error señalado en el párrafo anterior se intimará al oferente a cubrir la diferencia en un plazo de TRES (3) días bajo apercibimiento de aplicar las penalidades establecidas en el Inc. 115).

El art. 38 última parte del Decreto N° 3300/72, preve este supuesto, pero el error debe ser menor al 10% y el término para regularizarlo de 48 hs.

Inc. 67: No serán consideradas las ofertas que contengan cláusulas en contraposición con las de la licitación.

El Decreto N° 3300/72 no lo preve.

Inc. 68: Si el total cotizado para cada renglón no correspondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

El Decreto N° 3300/72 no lo preve.

Inc. 69: En caso de error evidente, debidamente comprobado a exclusivo juicio de la dependencia licitante, se desestimarán: a) La oferta: sin penalidades si el error es denunciado o advertido antes de la adjudicación; b) La adjudicación: con la pérdida del DOS (2) por ciento del valor adjudicado si el error es denunciado o advertido después de la adjudicación. En este último caso la denuncia del error debe ser efectuada por el adjudicatario dentro de los CINCO (5) días de recibir la adjudicación. Vencido este plazo perderá todo derecho.

El Decreto N° 3300/72 no lo preve.

Inc. 70: Para el examen de las propuestas presentadas se confeccionará un cuadro comparativo de precios.

El art. 42 del Decreto N° 3300/72, preve la confección del mismo cuadro.

Inc. 71: Para la comparación de precios que, de acuerdo al Inc. 54), se cotizarán en monedas extranjeras se calcularán los precios cotizados al tipo de cambio vendedor vigente al cierre del día anterior al de apertura de las ofertas. Cuando de acuerdo al párrafo anterior se hubiere cotizado en condición F.O.B., C.I.F. u otra forma permitida por autoridad competente, o la cantidad obtenida se adicionará, en la medida que corresponda, el importe de los fletes, seguros, impuestos y otros gastos obligados como si se tratara de efectos que hubieran de entregarse en el lugar de recepción, con exclusión de los gravámenes de que estuvieran liberados los elementos ofrecidos en razón de su procedencia o de acuerdo a las normas vigentes fijadas por autoridad competente. Igual procedimiento se seguirá en los casos en que de acuerdo con el Inc. 45), apartado d), se formulen ofertas con flete, acarreo, descarga y/o estiba en depósito por cuenta del Estado.

El art. 43 del Decreto N° 3300/72, preve la cotización de la moneda extranjera al cambio oficial al día de la apertura.

Inc. 72: En cada dependencia con facultades para contratar funcionará una comisión de preadjudicaciones que estará integrada por tres miembros como mínimo, cuya forma de actuación será determinada por la respectiva autoridad jurisdiccional. Si así conviniera a los intereses de la dependencia, también podrán funcionar comisiones análogas en las dependencias licitantes en el interior del país. Cuando se tratare de contrataciones para cuya apreciación se requieran conocimientos técnicos o especializados, dicha comisión deberá estar integrada por un técnico de la dependencia respectiva. En su defecto la comisión podrá solicitar a organismos estatales o privados competentes todos los informes que estimare necesario.

El art. 39 del Decreto N° 3300/72, también preve la existencia de una o mas Comisiones de Preadjudicación con tres miembros como mínimo.

Inc. 73: En caso de igualdad de precios, la preadjudicación recaerá en la propuesta que ofrezca elementos de origen nacional y de subsistir el empate recaerá en la propuesta que ofrezca elementos de mejor calidad si ello surgiera de las características especificadas en la oferta y/o de las muestras presentadas. De mantenerse la igualdad se solicitará de los respectivos proponentes que por escrito y dentro del término de TRES (3) días, formulen una mejora de precios. Cuando el domicilio del oferente diste mas de cien kilómetros de la sede donde se efectuó la apertura de la licitación, dicho término se extenderá a OCHO (8) días. Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán abiertas en el lugar, día y hora establecidos en el requerimiento, labrandose el acta pertinente. El silencio del oferente invitado a desempatar se entenderá como que no modifica su oferta procediendose en su consecuencia. De subsistir el empate, por no lograrse la modificación de los precios o por resultar éstos nuevamente empatados, se dará preferencia en la preadjudicación en la propuesta que originariamente hubiera acordado descuento por pago en el plazo fijado en el Inc. 110). De mantenerse el empate se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas. No se solicitará mejora de precios y se seguirá el procedimiento indicado en los párrafos cuarto y quinto cuándo el renglón empatado no exceda del monto establecido por el art. 56), inc. 3), apartado a) de la Ley. Los sorteos se efectuarán por la comisión de preadjudicaciones en presencia de los interesados que concurrieran, labrandose el acta pertinente.

El art. 48 del Decreto N° 3300/72, partiendo del supuesto de igualdad de precio y calidad, resuelve el empate llamando a los proponentes a mejorar las ofertas en remate verbal.

Inc. 74: La preadjudicación podrá efectuarse aún cuando se hubiere obtenido una sola oferta. El organismo contratante requerirá al preadjudicatario la acreditación efectiva de los extremos del Inc. 2). Dicha acreditación deberá realizarse dentro de los DOS (2) días a contar de la publicación de la preadjudicación.

El Decreto N° 3300/72, no preve tal supuesto.

Inc. 75: Salvo en el caso previsto en el Inc. 73), párrafo cuarto los descuentos que se ofrezcan por pago dentro de un plazo determinado no serán considerados a los efectos de la comparación de ofertas, debiendo no obstante ser tenidos en cuenta para el pago si la cancelación de las facturas se efectúa dentro del término fijado.

El Decreto N° 3300/72, no preve tal supuesto.

Inc. 76: La preadjudicación deberá recaer en la propuesta mas conveniente para el organismo, teniendo en cuenta la calidad, el precio, la idoneidad del oferente y las demás condiciones de la oferta.

El art. 45 del Decreto N° 3300/72, preve que la preadjudicación recaerá sobre la propuesta de menor precio, salvo por excepción que se lo haga por calidad.

Inc. 77: En cualquier estado del trámite, previo a la adjudicación, el organismo licitante podrá, por causas fundamentadas: a) Dejar sin efecto la licitación; b) Preadjudicar todos o partes de los renglones licitados; c) Preadjudicar parte de un renglón previa conformidad del oferente, salvo el caso previsto en el inc. 52).

El art. 50 del Decreto N° 3300/72, preve tal supuesto sin necesidad de causas fundamentadas.

Inc. 78: Las preadjudicaciones deberán ser anunciadas durante TRES (3) días como mínimo, cuando se trate de licitaciones públicas; DOS (2) días como mínimo cuando se trate de licitaciones privadas y UN (1) día como mínimo cuando se trate de contrataciones directas, salvo el caso del apartado c) del Inc. 3) del art. 56 de la Ley, en uno o en más lugares visibles del local de la dependencia licitante al cuál tendrá acceso el público. El mismo procedimiento, con sus fundamentos, deberá seguirse cuando la autoridad competente para aprobar, modifique la preadjudicación aconsejada por la comisión de preadjudicaciones. En estos casos deberá comunicarse expresamente y en forma fehaciente al oferente cuya preadjudicación le fue modificada. Esta comunicación deberá ser hecha antes del plazo de iniciación de los anuncios.

El art. 49 del Decreto N° 3300/72, preve fijar lugar, día y hora para hacer conocer la preadjudicación, y concede el término de tres días hábiles para efectuar observaciones.

Inc. 79: Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro del plazo que se fije en las cláusulas particulares, el que no podrá ser inferior a TRES (3) días a contar desde el vencimiento del término fijado para los anuncios. Las impugnaciones serán resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratación en decisión que no podrá ser posterior a la de la adjudicación. Durante el término establecido en este inciso y en el precedente, las actuaciones completas que constituyen el acto licitatorio se pondrán a disposición de los oferentes para su vista.

El art. 49 del Decreto N° 3300/72, preve el término de tres días hábiles para efectuar observaciones.

Inc. 80: El contrato se perfecciona con la adjudicación efectuada por la autoridad competente dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta, según lo dispuesto en el Inc. 61), y la comunicación a que se refiere el Inc. 81).

El art. 53 del Decreto N° 3300/72, preve que el contrato se perfecciona con la recepción de la orden de compra o provisión por parte del adjudicatario.

Inc. 81: La adjudicación será comunicada al interesado en forma fehaciente dentro de los SIETE (7) días de acordada, mediante orden de compra o venta y excepcionalmente en cualquier otra forma, constituyendo esa comunicación siempre que se reciba dentro de los VEINTE (20) días de su expedición, la orden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas. Para el caso de efectuarse la notificación de excepción que se menciona precedentemente, dentro

de los TRES (3) días siguientes deberá remitirse la orden de compra o venta correspondiente y en todos los casos los plazos comenzarán a regir desde la fecha de recepción de esta última. Vencidos dichos plazos, el interesado que no hubiere recibido la orden de compra o venta, podrá requerirla personalmente o por medio fehaciente. Si dentro de los TRES (3) días siguientes no se hubiera concretado dicha comunicación, el adjudicatario podrá desistir de su oferta. Se tendrá por aceptado el contrato, si el adjudicatario dentro de los TRES (3) días posteriores al recibo de la comunicación hecha una vez vencido los términos establecidos en los párrafos anteriores no la rechazara bajo constancia.

El Decreto N° 3300/72, también preve la orden de compra como medio de notificación.

Inc. 82: La orden de compra o venta, deberá contener las estipulaciones básicas de la contratación, en especial: a) Forma de pago establecida; b) Plazo fijado para la apertura de la correspondiente Carta de Crédito si se hubiere estipulado esa forma de pago. c) Lugar, forma y plazo de entrega. En caso de discordancia con las previsiones contractuales prevalecerán estas y se interpretarán que se trata de errores u omisiones deslizados en la orden. sin perjuicio de ello los errores u omisiones se salvarán en el momento que se los advierta.

El art. 54 del Decreto N° 3300/72, preve que la orden de compra no deberá contener estipulaciones distintas a la documentación que diera origen al contrato.

Inc. 83: Forman parte integrante del contrato: a) Las disposiciones de este reglamento, las cláusulas particulares de la contratación y las especificaciones; b) La oferta adjudicada; c) Las muestras correspondientes; d) La adjudicación; e) La orden de compra o venta.

El art. 53 del Decreto N° 3300/72, establece que forman parte del contrato: el pliego de bases y condiciones, las ofertas aceptadas, las muestras presentadas, la adjudicación y la orden de compra.

Inc. 84: La dependencia contratante, con aprobación de la autoridad competente de acuerdo con el monto de la diferencia, tendrá derecho a: a) Aumentar o disminuir hasta un DIEZ (10) por ciento el total adjudicado en las condiciones y precios pactados previa conformidad del adjudicatario. Ese porcentaje podrá incidir tanto en las entregas totales como en las entregas parciales; b) Prorrogar, en las condiciones y precios pactados, los contratos de presentaciones de cumplimiento sucesivos (abastecimiento de víveres, forrajes, combustibles, etc.) por un plazo que no excederá a la décima parte del término establecido para el contrato, con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con el apartado a) o sin ellas. A los efectos del ejercicio de esa facultad, el organismo licitante deberá emitir la orden pertinente antes del vencimiento de la vigencia del contrato; c) Aceptar entregas en más que no excedan en un VEINTE (20) por ciento de lo contratado, cuando se trate de elementos que deban fabricarse especialmente para uso oficial o que deban llevar marcas o señales identificatorias de dicho uso. En tales casos, el adjudicatario deberá practicar un descuento del DIEZ (10) por ciento sobre el precio convenido, el que se aplicará sobre las entregas que excedan del porcentaje autorizado en el apartado a); d) Cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser aceptadas en mas o menos según lo permita el mínimo fraccionable. Estas diferencias serán aumentadas o disminuídas del monto de la facturación correspondiente sin otro requisito; e) En licitaciones de

varios renglones, para aquellos de poco monto proceder de la siguiente manera: - A los fines de su adjudicación, se adecuarán al régimen de Caja Chica, hasta el monto límite fijado para las compras menores, respetando las ofertas de menor precio. Igual procedimiento será aplicado en el caso de varios renglones correspondientes a un mismo oferente cuyas sumas no exceda dicho límite. - En los casos de elementos a importar, se podrán agrupar hasta el doble del monto límite antes citado, a los efectos de evitar costos administrativos de adjudicación. Estos casos quedarán exceptuado de lo dispuesto en el Inc. 76.

El art. 55 del Decreto N° 3300/72, preve el aumento o disminución del total adjudicado sin indicar porcentaje y la prolongar el contrato por un término que no exceda de treinta días.

Inc. 85: Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la ejecución o interpretación del contrato, serán resueltas conforme con las previsiones de este reglamento, de las cláusulas particulares de la contratación y de la legislación supletoria. En las cláusulas particulares no podrá estipularse el juicio de árbitros o amigables compondores para dirimir las divergencias que se produjeran con motivo de la interpretación o ejecución del contrato.

El Decreto N° 3300/72, no preve este artículo.

Inc. 86: El contrato no podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario previa anuencia de la autoridad competente. En caso de infracción, se podrá declarar rescindido el contrato de pleno derecho.

El art. 56 del Decreto N° 3300/72, preve idéntica prohibición.

Inc. 87: En los casos de rescisión del contrato, los recursos que se dedujeran contra la respectiva resolución no tendrá efecto suspensivo.

El Decreto N° 3300/72, no lo preve.

Inc. 88: Cuando el Estado rescinda un contrato por una causa justificada, no prevista en este reglamento, salvo el apartado h) del Inc. 54), el adjudicatario tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos que probare haber incurrido con posterioridad a la adjudicación y con motivo del contrato, pero no se hará lugar a reclamación alguna por lucro cesante o por intereses de capitales requeridos para financiación. Corresponderá, también, el reconocimiento del valor del pliego de bases para la licitación si el mismo debió ser adquirido.

El Decreto N° 3300/72, no lo preve.

Inc. 89: Los adjudicatarios cumplirán la prestación a que se hubieran obligado ajustándose a las formas, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en el contrato. Los plazos para dicha prestación se computarán a partir del día siguiente a la fecha de recepción de las comunicaciones a que se refiere el Inc. 81), según lo que corresponda o en su defecto a partir del día siguiente desde la fecha de apertura del respectivo crédito documentario cuándo se hubiera convenido esa forma de pago.

El art. 57 del Decreto N° 3300/72, contiene similar previsión a los fines del cumplimiento.

Inc. 90: La recepción de las mercaderías en los lugares establecidos por el contrato, tendrá el carácter de provisional, y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a los requisitos en este reglamento para la recepción definitiva.

El art. 59 del Decreto N° 3300/72, preve el mismo carácter a la recepción de las mercaderías.

Inc. 91: El adjudicatario podrá solicitar la prórroga del término contractual antes del vencimiento del mismo. el organismo licitante deberá resolver el pedido dentro de los DIEZ (10) días de presentado y, en caso de silencio, se tendrá por concedido. De este derecho el adjudicatario solo podrá hacer uso en dos oportunidades como máximo y el total de prórroga no podrá exceder en ningún caso, de un término equivalente al fijado primitivamente para el cumplimiento del contrato.

El Decreto N° 3300/72, no lo preve.

Inc. 92: Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prórrogas que se hubieran acordado sin que los elementos fueran entregados o prestados los servicios de conformidad, el contrato quedará rescindido de pleno derecho con la parte no cumplida, sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante proceder al dictado de la declaración formal de la rescisión, salvo que el adjudicatario haya pedido antes del vencimiento y agotadas las posibilidades de nuevas prórrogas de acuerdo a los dispuesto en el Inc. anterior, la rehabilitación del contrato por la parte no cumplida. Esta rehabilitación podrá ser acordada por una sola vez previo pago por el adjudicatario de una multa equivalente al CINCO (5) por ciento del valor del contrato que se rehabilita. Un contrato rehabilitado deberá cumplirse dentro de los mismos plazos y podrán otorgarse las mismas prórrogas y las mismas condiciones que para el contrato original. Si el Adjudicatario que solicitó la rehabilitación, no hace el pago de la multa del CINCO (5) por ciento dentro de los TRES (3) días de habersele comunicado la aceptación de la rehabilitación, se dará por rescindido el contrato sin mas trámite, en las condiciones estipuladas en este mismo Inc. en los contratos a que se refiere el Inc. 119), el incumplimiento en mas de dos ocasiones facultará al organismo licitante para declarar su rescisión.

El Decreto N° 3300/72, no lo preve.

Inc. 93: En los casos en que la dependencia contratante debe realizar análisis, ensayos, pericias u otras pruebas para verificar si los respectivos elementos, trabajos o servicios se ajustan a lo requerido, se procederá conforme a las siguientes Normas: 1) Análisis de productos perecederos: Se efectuará con las muestras necesarias que se extraerán en el momento de la entrega, en presencia del adjudicatario, de su representante o del encargado de la entrega. En ese mismo acto se comunicará la hora en que se practicará el análisis, a fin de que pueda concurrir el adjudicatario o su representante. La incomparencia del adjudicatario o de quién lo represente no será obstáculo para la realización del análisis cuyo resultado se tendrá por firme y definitivo. Cuando el resultado del análisis efectuado indique el incumplimiento de lo pactado y, por la naturaleza del producto, no sea posible proceder a la devolución de la cantidad entregada, el Estado no reconocerá el pago de la misma, sin perjuicio de la aplicación de la multa que correspondiera. 2) Análisis de productos no perecederos: a) Se extraerán las muestras que la dependencia contratante estime necesarias y el resultado del análisis se comunicará al adjudicatario por medio fehaciente; b) En caso de no estar conforme el adjudicatario con el resultado del análisis, deberá manifestarlo por escrito, en

forma fundada, dentro de los TRES (3) días de recibida la comunicación. En el plazo que fije la dependencia contratante, que será el más breve posible, se procederá a la extracción de otras muestras y a la realización de un nuevo análisis en presencia del adjudicatario o de un representante del mismo debidamente autorizado. La incomparencia del adjudicatario o de su representante, no será obstáculo para la realización del nuevo análisis, cuyo resultado se tendrá por firme y definitivo; 3) Pericias, ensayos y otras pruebas: Se adoptarán, en cada caso, según las circunstancias particulares del mismo, las medidas adecuadas para que la diligencia pueda realizarse en forma que garantice el control de sus resultados por parte del interesado. 4) Organismo interviniente: En el caso de que fuera indispensable recurrir a la prueba pericial o informe de carácter técnico, se dará intervención en lo posible, a reparticiones u oficinas nacionales o, por su orden, provinciales o municipales si la dependencia contratante no contara con el personal o los elementos necesarios; 5) Costo de las pruebas: Si los elementos sometidos a análisis, pericia, ensayo, etc. fueran de recibo, el costo de la diligencia correrá por cuenta del organismo licitante, en caso contrario por cuenta del interesado, con excepción de los gastos motivados por la intervención de un perito o representante del interesado, que será siempre a costa de éste.

El art. 62 del Decreto N° 3300/72, preve el caso de análisis o pruebas especiales antes de la entrega definitiva.

Inc. 94: A los efectos de la conformidad definitiva, deberá procederse, previamente, a la confrontación de la prestación con las especificaciones del pedido, con la muestra patrón o con la presentada por el adjudicatario, y en su caso con los resultados de la prueba que fuere necesario realizar, además de lo que dispongan las cláusulas particulares. Cuando la contratación no se hubiera realizado sobre la base de muestras o no estuviera establecida, por excepción, la calidad de los elementos, queda entendido que éstos deben ser nuevos, sin uso, de los calificados en el comercio como de primera calidad y terminado de acuerdo a las reglas del arte.

El art. 60 del Decreto N° 3300/72, preve similar porcedimiento.

Inc. 95: Cuando en una oferta no se fije expresamente el plazo de entrega, se entenderá que se ajusta al plazo exigido en las cláusulas particulares, y, si éstas no lo fijaran, será el que estipule el Inc. 45 apartado e).

Inc. 96: Cuando se establezca como plazo de entrega la condición de inmediato, se entenderá que la prestación debe satisfacerse por el adjudicatario dentro de los CINCO (5) días a partir de la fecha a que se refiere el Inc. 89), segundo párrafo.

El art. 58 del Decreto N° 3300/72, preve que debe satisfacerse dentro de los diez días.

Inc. 97: En aquellos casos en que la prestación a cargo del adjudicatario no pudiera cumplirse sino después de satisfechas determinadas obligaciones por la dependencia contratante (entrega de ciertos elementos, devolución de pruebas conformadas, realización de trabajos o instalaciones, etc.), se establecerá en las cláusulas particulares los plazos correspondientes para la satisfacción de tales requisitos. El plazo fijado para el cumplimiento del contrato, salvo que las cláusulas particulares establezcan otras normas, se contará desde el día siguiente a aquel en que la dependencia contratante de cumplimiento a las citadas obligaciones. Si la dependencia contratante no cumpliera en el término el adjudicatario podrá optar, en cualquier momento y por escrito, entre: a) Reclamar el mayor costo de

mano de obra, exclusivamente, derivado de la demora imputable al Estado, extremos ambos que deberá probar en forma fehaciente en su oportunidad, con arreglo a los convenios laborales homologados por autoridad competente; b) Solicitar la rescisión del contrato en los términos y con los efectos determinados en el Inc. 88). El cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones antes de que se haya producido la opción importará la caducidad de los derechos a que se refieren los párrafos anteriores. Consecuentemente el adjudicatario deberá cumplimentar el contrato de acuerdo con las estipulaciones del mismo, salvo la ampliación automática del plazo en la medida de la demora consentida. No será de aplicación el apartado a) del presente inciso cuando se incurra en demora en la apertura del crédito documentario a que se refiere el Inc. 45), apartado h), salvo por la parte correspondiente a intalación de equipos, si el monto está discriminado en el contrato. En consecuencia, en tales casos y salvo esta última excepción planteada, el adjudicatario solo podrá dar por rescindido el contrato según el apartado b) de este inciso o consentir la demora.

El Decreto N° 3300/72, no lo preve.

Inc. 98: Las dependencias designarán con carácter permanente o accidental, el o los responsables de la certificación de la recepción definitiva de bienes o la prestación de servicios con la única limitación de que esa designación no deberá recaer, salvo la imposibilidad material, en quiénes hayan intervenido en la adjudicación respectiva pudiendo, no obstante requerirse su asesoramiento. Los funcionarios responsables de la recepción definitiva remitirán a la oficina ante la cual se tramitan los pagos, la certificación correspondiente.

El art. 61 del Decreto N° 3300/72, preve la designación de inspectores o comision a tales fines.